Proyecto de Ley N° 10752/2024-CR

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite Documentario
08 ABR. 2025
RECIBIDO
Firma: Hora: 11:32

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA ARTÍCULOS DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1362, QUE REGULA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA MEDIANTE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS

El Grupo Parlamentario **ALIANZA PARA EL PROGRESO** a iniciativa del Congresista de la República **EDUARDO SALHUANA CAVIDES,** en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, y de conformidad con los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, proponen el siguiente **PROYECTO DE LEY:**

"LEY QUE MODIFICA ARTÍCULOS DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1362, QUE REGULA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA MEDIANTE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS"

Artículo 1.- Objeto

La presente ley tiene por objeto introducir modificatorias al Decreto Legislativo N° 1362, Ley que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos, a fin de promover la eficiencia en el trámite de los procesos de promoción de inversión privada y su ejecución.

Artículo 2.- Modificación del Decreto Legislativo N° 1362

Se modifica los artículos 5, 9, 11, 12, 15, 21 y 32 del Decreto Legislativo N 1362, Ley que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos, el cual queda redactado en los siguientes términos:

> "**Artículo 5. Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada**
>
> (...)
>
> 5.6. El Ministerio de Economía y Finanzas ***emite opinión previa respecto de la Versión Final del contrato de Asociación Público-Privada, de conformidad con el artículo 41 del presente Decreto Legislativo***, dentro del marco de sus competencias, exclusivamente sobre las siguientes materias, considerando la oportunidad y alcance definidos en el Reglamento:
>
> 1. Clasificación del proyecto como Asociación Público-Privada.
> 2. Criterios de elegibilidad previamente aplicados por las Entidades

Públicas Titulares de Proyectos en el marco de sus competencias.
3. Equilibrio económico financiero.
4. Capacidad presupuestal del Estado para el cumplimiento de obligaciones derivadas del contrato.
5. Compromisos firmes y contingentes explícitos.
6. Garantías financieras y no financieras.
7. Cumplimiento de reglas fiscales.
8. Impacto en la competencia y desempeño del mercado en el que se desarrolle el proyecto.
9. Controversias en el marco del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI).
10. Consistencia con la normativa tributaria vigente.
11. Cumplimiento de la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en caso corresponda.

(...).

Artículo 9. Seguimiento de la Inversión y soporte especializado

(...)

9.2 Las entidades públicas señaladas en el artículo 2 están obligadas a ***reportar al Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas los principales aspectos relacionados con el desarrollo e implementación de los proyectos de Asociación Público-Privada y proyectos en Activos, así como a*** atender los requerimientos de información que realice el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión, bajo responsabilidad administrativa, en el plazo y condiciones que establezca el Reglamento.

(...).

Artículo 11. Facultad discrecional de las entidades públicas

Las entidades públicas que tienen a su cargo la aprobación, opinión, conducción, ejecución, supervisión y fiscalización, en cualquiera de las fases de los proyectos regulados en el presente Decreto Legislativo, están facultadas para actuar discrecionalmente, en el ámbito de sus competencias, con el fin de optar por la decisión administrativa, debidamente sustentada, que se considere más conveniente en el caso concreto, sin incurrir en responsabilidad, conforme a lo establecido en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. ***Para estos fines, la Contraloría General de la República se limita a verificar la existencia de sustento de la decisión discrecional.***

Artículo 12. Proinversión

(...)

12.9 Proinversión aplica mecanismos disuasivos a las entidades públicas titulares de proyectos, para evitar que abandonen sus proyectos en cartera, entre ellos, el reembolso de los gastos incurridos por Proinversión. ***Una vez que el proyecto es encargado a Proinversión o la Iniciativa Privada es declarada de relevancia, solo puede ser excluido por decisión del Consejo Directivo de Proinversión, bajo sanción de responsabilidad.***

Artículo 15. Comités Especiales de Inversiones

15.1 Los Comités Especiales de Inversiones *son órganos colegiados* encargados de aprobar ***los siguientes documentos que corresponden a los principales hitos del proceso***: Informe de Evaluación, Plan de Promoción, Bases, Versión Inicial del Contrato previa a la fase de Transacción, Versión Final del Contrato y sus respectivas modificaciones sustanciales, Declaratoria de Interés, así como aquellos actos dispuestos por el Consejo Directivo.

(...).

Artículo 21. Contratos de Asociación Público-Privada

(...)

21.2 ***Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos de Asociación Público-Privada que recaigan sobre bienes públicos, no otorgan al inversionista un derecho real sobre los mismos. Los Contratos de Concesión pueden contemplar la obligación de los inversionistas de ejercer la defensa posesoria conforme a las reglas del Código Civil y del Código Procesal Civil, caso en el cual, sólo para efectos del ejercicio de dichas acciones, se considerará que el Inversionista cuenta con el derecho real de posesión.***

(...).

Artículo 32. Fase de Formulación

(...)

32.2 En el caso de las Asociaciones Público-Privadas cofinanciadas, la Formulación comprende dos componentes: i) el proyecto de Inversión que se ***desarrolla conforme a las directivas que a tal efecto dicte el*** Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en concordancia con lo dispuesto en la Octava Disposición Complementaria Final; y, ii) el Informe de Evaluación, regulado por la

normativa del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. ***En ningún caso, la regulación de la formulación del proyecto de Inversión duplica el contenido del Informe de Evaluación.***

(...)."

Artículo 3. Incorporación de artículos al Decreto Legislativo 1362.

Se incorpora el inciso 9.4 al artículo 9, el artículo 10.A., los incisos 30.6, 30.8 y 30.9 al artículo 30, el artículo 30.A, el artículo 30.B, el artículo 30.C, el artículo 34.3, el artículo 35.A, el artículo 41.A, el artículo 41.B, el inciso 43.3 al artículo 43, el inciso 56.8 al artículo 56 y los incisos 56.3 y 56.4 al artículo 58 del Decreto Legislativo N 1362, Ley que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos, el cual queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 9.

[...]

9.4. El Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas publicará periódicamente informes de seguimiento de los proyectos de inversión en el territorio nacional a partir de la información brindada por las entidades titulares de proyectos, así como indicadores de avances de los proyectos por cada una de ellas.

Artículo 10 – A. Licencia de habilitación urbana o de edificación

10 – A.1. La ejecución de los proyectos de Asociación Público-Privada y Proyectos en Activos no requiere de licencias de habilitación urbana o de edificación. Cuando los proyectos se encuentren vinculados a bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación, corresponde que el Ministerio de Cultura emita la autorización sectorial correspondiente.

10 – A.2. Las obras de habilitación urbana o edificación a las que se refiere el párrafo precedente son regularizadas ante las municipalidades correspondientes, conforme al procedimiento administrativo establecido en el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.

10 – A.3. Las obras ejecutadas que se encuentren vinculadas a bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, solo podrán ser regularizadas a través del procedimiento excepcional regulado por el Ministerio de Cultura, siempre que no se haya ocasionado daño o alteración irreversible al bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, o no se hayan dañad

o comprometido restos prehispánicos o evidencias arqueológicas, muebles o inmuebles, que deben ser intervenidos por medio de métodos arqueológicos, conforme a la normativa vigente.

10 – A.4. Los procedimientos administrativos para obtener Certificado de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y Licencia Municipal de Funcionamiento de los establecimientos de los proyectos de Asociación Público-Privada y Proyectos en Activos son de aprobación automática.

"Artículo 30. Fases

30.1 Los proyectos ejecutados bajo la modalidad de Asociación Público-Privada, independientemente de su clasificación y origen, se desarrollan en las siguientes fases: Planeamiento y Programación, Formulación, Estructuración, Transacción y Ejecución Contractual. ***Los proyectos ejecutados por la modalidad de Asociación Pública Privada Autosostenible, que correspondan a un sector que tenga un sistema de planificación establecido normativamente, pasan directamente a la fase de Transacción y Ejecución Contractual.***

[...]

30.8 En caso de que las áreas necesarias para la ejecución de los proyectos de Asociación Público Privada y Proyectos en Activos coincidan total o parcialmente con otros proyectos de alcance nacional, regional o local; en el marco de sus competencias y de la normativa aplicable, las entidades públicas respectivas compatibilizan o levantan cualquier carga, reserva o afectación que impida, limite o restrinja el otorgamiento de autorizaciones o el uso de las áreas de dominio público o privado necesarias, y disponen las medidas necesarias para viabilizar la ejecución de los proyectos de Asociación Público Privada y Proyectos en Activos.

30.9. Las entidades públicas titulares de las afectaciones, cargas, reservas o proyectos disponen su compatibilización o levantamiento en los plazos máximos que establezca el Reglamento, bajo responsabilidad, a sola solicitud de la entidad titular del proyecto de Asociación Público-Privada o Proyectos en Activos; sin perjuicio de los plazos necesarios para la implementación de medidas complementarias por parte de las entidades competentes establecidos en el numeral 30.8 Lo establecido en el presente artículo no limita o restringe la aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución de obras de Infraestructura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2019- VIVIENDA.

Artículo 30 – A. Determinación del valor de tasación por parte de las entidades titulares de proyectos

30 – A.1. Autorícese a las entidades públicas titulares del proyectos para que, en forma alternativa a lo dispuesto en el artículo 12 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución de obras de Infraestructura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA, puedan fijar de manera directa el valor de tasación de los inmuebles necesarios para la ejecución de los proyectos a su cargo.

30 – A.2. Para la fijación del valor de tasación, las entidades titulares de proyectos se encuentran facultadas a contratar a peritos, sean estos personas naturales o jurídicas, debidamente inscritos en el Registro de Peritos Valuadores (REPEV) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en el Registro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, o en el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. Las tasaciones efectuadas por peritos son vinculantes para la entidad titular del proyecto cuando el titular del predio objeto de expropiación las acepte. En el supuesto contemplado en este inciso, los peritos contratados para efectuar la tasación responden civil, penal y administrativamente por el alcance de sus respectivos informes, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a la entidad titular del proyecto.

30 – A.3. En cualquiera de los casos mencionados en los incisos precedentes, la entidad titular del proyecto y el inversionista pueden acordar que este último efectúe el pago al titular del predio objeto de expropiación, con cargo a que dicha suma sea reembolsada por la entidad.

30 – A.4. El procedimiento de tasación, así como el plazo máximo para efectuar el pago al titular del predio expropiado se ajusta a lo establecido en el Reglamento Nacional de Tasaciones y la normativa vigente.

Artículo 30 – B. Liberación y registro de Interferencias

30–B.1. Con la finalidad de dotar de mayor eficiencia a los procesos de liberación de interferencias, facúltese a las entidades titulares de los proyectos para financiar o ejecutar directamente las actividades e intervenciones necesarias para la liberación, remoción o reubicación de interferencias, así definidas en el marco normativo aplicable o en los respectivos contratos suscritos por el Estado Peruano.

30–B.2. Las empresas estatales o entidades públicas supervisan o aprueban las actividades e intervenciones vinculadas a la liberación de interferencias a su cargo, conforme a los términos establecidos en los convenios que para tal efecto suscriban con las entidades públicas titulares de los proyectos. En ningún caso el pronunciamiento, opinión o aprobación a cargo de estas, puede exceder los plazos máximos previstos en la normativa vigente o en el Reglamento, bajo responsabilidad.

30–B.3. Para el caso de las interferencias a cargo de empresas privadas, las entidades públicas titulares de los proyectos de Asociación Público Privadas y proyectos en Activos realizan las coordinaciones necesarias con las referidas empresas, pudiendo suscribir para tal fin, los acuerdos o convenios correspondientes, en el plazo máximo previsto en el Reglamento.

Artículo 30–C. Contratación de obras y servicios para la adquisición de áreas y liberación de interferencias en los proyectos de Asociación Público Privadas y proyectos en Activos

30–C.1. Para los fines establecidos en el numeral 30.3 del artículo 30, se encuentra excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, la contratación de obras y servicios para la adquisición de áreas y liberación de interferencias en los proyectos de Asociación Público Privadas y proyectos en Activos correspondientes al Gobierno Nacional y a las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento competentes, las que se sujetan a la regulación que apruebe el titular del sector a las que pertenecen y se encuentran bajo la permanente supervisión de la entidad del Gobierno Nacional titular del proyecto de Asociación Público Privada y en Activos.

30–C.2. Las infracciones, sanciones y procedimiento sancionador regulados en el Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, son aplicables a los proveedores, contratistas y subcontratistas, comprendidos en las contrataciones que regula el presente artículo con excepción de las previstas en los literales e), l) y n) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

30–C.3. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aplica de manera alternativa lo dispuesto en el presente artículo o lo previsto en la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura,

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2019-VIVIENDA.

Artículo 34. Fase de Transacción

(...)

34.3 La adjudicación de la buena pro se suspende si la propuesta económica del Postor que resulte adjudicatario es menor en un porcentaje de los valores máximos a ofertar, el cual será determinado por las Bases del procedimiento. En este supuesto, el Comité procederá a la revisión y validación del modelo económico financiero del Postor. El procedimiento se reanuda con la decisión del Comité de validar o descartar la propuesta.

Artículo 35 –A. Responsabilidad disciplinaria en la tramitación de los procedimientos

35–A.1. En la recepción de solicitudes, tramitación, evaluación y emisión del acto administrativo para la obtención de licencias, permisos, autorizaciones u otros que se requieran para el desarrollo de los proyectos de Asociación Público Privadas y proyectos en Activos, las entidades públicas cumplen los plazos y exigen únicamente los requisitos señalados en la normativa correspondiente. En las respectivas solicitudes, se consigna expresamente que su obtención es necesaria para la ejecución de un proyecto de Asociación Público Privadas y proyectos en Activos.

35–A.2. El incumplimiento de lo previsto en el numeral precedente conlleva responsabilidad administrativa disciplinaria, conforme a las normas que sobre procedimiento administrativo disciplinario están reguladas por la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM. No se incurre en responsabilidad en los casos de suspensión de plazos previstos en la normativa aplicable.

35–A.3. Para el cómputo de los plazos señalados en el numeral 35A.1, en el caso de los proyectos del subsector electricidad, los incidentes dentro y fuera de la entidad a los que hace referencia el artículo 28 del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, son definidos mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Energía y Minas.

Artículo 41– A. Medidas para garantizar la eficacia y predictibilidad a los procesos en materia ambiental

41–A.1. La autoridad ambiental competente incorpora a los opinantes técnicos vinculantes y no vinculantes en el acompañamiento de la etapa de elaboración de la línea base del Estudio de Impacto Ambiental detallado, semidetallado o de su

modificación, tanto en las visitas de campo como en la suscripción de las actas y elaboración de recomendaciones, considerando lo señalado en el Sub Capítulo IV del Título III, del "Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de la Inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental", aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM. La información a ser levantada puede ser complementada con información secundaria que el titular presenta, en los casos que corresponda.

41–A.2. Las opiniones que se requieran en los procedimientos administrativos de evaluación ambiental, incluyendo las referidas a la extracción o colecta de recursos forestales y de fauna silvestre o recursos hidrobiológicos en el procedimiento de clasificación, de acuerdo a lo señalado en el párrafo 8.3 del artículo 8 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, se emiten, bajo responsabilidad, dentro del plazo máximo establecido en la norma especial aplicable del sector o, en defecto de ésta, en el plazo máximo establecido en las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental para la emisión de informes. El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se aplica conforme con lo previsto en el artículo II del Título Preliminar del referido Texto Único Ordenado.

41–A.3. La Autoridad Ambiental competente, al momento de evaluar los términos de referencia propuestos por el administrado a que se refiere el párrafo 8.4 del artículo 8 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental se encuentra facultada a aprobar, formular observaciones o desaprobar la solicitud presentada, de ser el caso.

41–A.4. Cuando el administrado pretenda realizar la modificación del Estudio Ambiental utiliza para su elaboración, los términos de referencia para proyectos que presenten características comunes o similares regulados en la normativa sectorial vigente.

<u>Artículo 41 – B</u>. Medidas para garantizar la celeridad y predictibilidad en los procesos en materia de intervenciones arqueológicas

41–B.1. Tratándose de los proyectos de Asociación Público Privadas y proyectos en Activos, la expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), la aprobación del Informe final del Plan de Monitoreo Arqueológico, la autorización del Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA), así como la autorización del Proyecto de Rescate Arqueológico (PRA) se dan en las condiciones y el plazo señalados en el Reglamento, y están sujetos a las normas del silencio administrativo positivo.

41–B.2. Para la ejecución de los proyectos de Asociación Público-Privada y proyectos en Activos, que impliquen remoción de suelos, una vez emitido el CIRA o en las excepciones establecidas en el Artículo 57 del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2014- MC, se debe contar con el respectivo Plan de Monitoreo Arqueológico autorizado por la instancia competente del Ministerio de Cultura. En ningún caso la autorización es otorgada en vía de regularización.

41–B.3. Culminado el periodo de ejecución del PRA, el director de la intervención arqueológica presenta el informe final respectivo, el que es resuelto en el plazo que disponga en Reglamento, sujeto a las normas del silencio administrativo positivo. En el acto resolutivo que apruebe el informe final del Rescate Arqueológico, se dispone la continuación de los trabajos de remoción de suelos con el correspondiente Plan de Monitoreo Arqueológico, la expedición de CIRA o la incorporación del área rescatada al Plan de Monitoreo Arqueológico autorizado.

41–B.4. Para la presentación de las solicitudes de autorizaciones y aprobaciones las entidades titulares de los proyectos de Asociación Público Privadas y proyectos en Activos pueden solicitar la asesoría del equipo profesional especializado del Ministerio de Cultura.

41–B.5. Las medidas de mitigación, de carácter preventivo y compensación, así como de protección de los remanentes arqueológicos, si los hubiera, se realizan sin interferir con la continuidad de ejecución de las obras. La publicación de los resultados del PRA es de carácter obligatorio dentro del plazo señalado en la resolución que aprueba el informe final y se sujeta a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2014-MC.

41–B.6. Los procedimientos de expedición del CIRA, autorización de Plan de Monitoreo Arqueológico, PEA, PRA y sus respectivos informes finales, en los aspectos no regulados en el presente dispositivo legal o en el Reglamento, se rigen por las disposiciones del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC, y demás normas que emita el Ministerio de Cultura.

Artículo 43. Procedimiento general para los proyectos de Asociación Público Privadas

43.1. El Reglamento establece las fases y plazos para el desarrollo del procedimiento.

Artículo 56. Solución de controversias

(...)

56.8. En las controversias internacionales de inversión, de no prosperar el trato directo entre las partes, el Ministerio de Economía y Finanzas interviene en lugar de la entidad pública titular del proyecto para culminar la etapa de trato directo.

Artículo 58. Caducidad y Liquidación

(...)

58.3. A los fines de lo dispuesto en el numeral 58.1, el Reglamento establece el procedimiento correspondiente a fin de permitir la contratación de terceros interventores para la continuidad del proyecto.

58.4. Cuando la caducidad no obedezca al cumplimiento del plazo del Contrato, la liquidación puede diferirse a la culminación de la etapa o fase en que esta opere, por acuerdo de las partes sin requerirse adenda.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. – Autorización de Proyectos

Habilitase a las entidades titulares de proyectos para que, mediante la suscripción de convenios con los Gobiernos Regionales y Locales competentes, financien, contraten y ejecuten los proyectos complementarios, cuya realización resulte indispensable para la adecuada implementación de los proyectos de Asociación Público Privadas y proyectos en Activos, conforme a lo dispuesto en el marco normativo vigente. Para estos fines, las excepciones previstas en los artículos 10.A.1 y 30.C.1 se extienden a los proyectos complementarios que lleven adelante las entidades titulares de proyectos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA. Deróguese las siguientes disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1362: el numeral 5 del inciso 13.3 del artículo 13º; el numeral 4 del inciso 14.3 del artículo 14º; el artículo 36º; el artículo 37º; el inciso 38.3 del artículo 38º; los numerales 3 y 4 del inciso 41.1 del artículo 41º; el inciso 54.4 del artículo 54º; y el artículo 57º.

SEGUNDA. Deróguese los lineamientos de promoción y desarrollo de la inversión privada en Asociaciones Público-Privadas y en Proyectos en Activos y déjese sin efecto las opiniones vinculantes sobre la interpretación y la aplicación del Decreto Legislativo Nº 1362 emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

TERCERA. Deróguese los lineamientos vigentes para emisión de opiniones

previas emitidos por los organismos reguladores.

CUARTA. En un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente Ley, el Poder Ejecutivo elabora y publica las modificaciones pertinentes al Decreto Supremo Nº 240-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1362.

QUINTA. En un plazo no mayor a un (1) año calendario, las entidades titulares de los proyectos recopilan y ordenan toda la información relacionada con la presencia, remoción o reubicación de interferencias en la zona de influencia del respectivo proyecto, la misma que es remitida a la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), en calidad de sistema encargado del registro de la información correspondiente.

SEXTA. Lo previsto en el artículo 35A del Decreto Legislativo Nº 1362 se aplica a las solicitudes nuevas de autorización, licencia, permiso u otro pronunciamiento administrativo, así como a las que se encuentran en trámite. Para tal efecto, el solicitante informa a la entidad pública respectiva y a la Contraloría General de la República, sobre el incumplimiento de lo previsto en este artículo, a fin de que, bajo responsabilidad del titular, se adopten las medidas correspondientes.

SÉPTIMA. Constituye falta disciplinaria muy grave el incumplimiento o inobservancia de lo dispuesto en los artículos 9, 10.A, incisos 30.6 y 30.7 del artículo 30, 41, 41.A y 41.B, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética, y la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ACUÑA PERALTA Maria Grimaneza FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/04/2025 16:14:59-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CHIABRA LEON Roberto Enrique FAU 20161749126 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/04/2025 17:01:06-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CAMONES SORIANO Lady Mercedes FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/04/2025 16:52:20-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: RUIZ RODRIGUEZ Magaly Rosmery FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/04/2025 16:11:13-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GARCIA CORREA Idelso Manuel FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/04/2025 15:53:05-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: HEIDINGER BALLESTEROS Nelcy Lidia FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/04/2025 15:58:30-0500

Firmado digitalmente por: SOTO REYES Alejandro FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/04/2025 14:20:03-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: SOTO REYES Alejandro FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/04/2025 14:19:49-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: SALHUANA CAVIDES Eduardo FAU 20161749126 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/04/2025 15:31:07-0500

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A) CONTEXTO ECONÓMICO AL 2021

El Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025[1], elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado en sesión de Consejo de Ministros el 25 de agosto de 2021, el cual contiene las proyecciones macroeconómicas multianuales oficiales para la elaboración de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022; establece que en el periodo 2023-2025, la actividad económica alcanzaría un crecimiento promedio de 4,1% debido a un crecimiento sostenido de la demanda interna, principalmente por mayores inversiones. De esa manera, se precisa que, en el contexto de dar mayor impulso al Plan Nacional de Infraestructura, la inversión privada estará sostenida por el dinamismo de la inversión no minera, el cual servirá de vehículo para acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura y obras priorizadas bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (en adelante, "APPs").

Al respecto, debemos señalar que, la ejecución de proyectos de infraestructura y obras priorizadas bajo el esquema de APPs, no solo posee injerencia en un crecimiento económico, sino también, permite reducir la brecha de infraestructura y mejorar la provisión de servicios públicos con la finalidad de establecer mejores condiciones para la vida de los ciudadanos. Es en ese marco, que se hace necesario realizar un diagnóstico de los proyectos de APPs. Al respecto, EY Perú señala que "*un incremento del 10% en inversión en infraestructura generaría una subida de 1,3% del PBI, ya que por cada US$1.000 millones, se crean 35.000 empleos directos y 5.000 indirectos*"[2].

B) NECESIDADES PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y OTROS PROYECTOS DESDE 2019 A LA ACTUALIDAD

Por ello, en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), aprobado mediante Decreto Supremo N° 238-2019-EF y publicado el 28 de julio de 2019, se priorizaron cincuenta y dos (52) proyectos del alto impacto en la productividad y competitividad que benefician a la población. No obstante, a diciembre de 2021, se identificaron cinco (5) proyectos PNIC paralizados con una representación a un monto total de inversión equivalente a S/ 7,757 millones, conforme al siguiente cuadro:

---

[1] El Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025, se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2022_2025.pdf.

[2] Cuadro, Fernando (2022). Perú tiene US$ 19.600 millones en su cartera de proyectos. En La República. Consultado el 19 de enero del 2023. Link: https://larepublica.pe/economia/2022/10/20/inversion-peru-tiene-us196-millones-en-su-cartera-de-proyectos-plan-nacional-de- infraestructura-mef-kurt-burneo-g2g.

Cuadro 1

Proyectos PNIC paralizados a diciembre de 2021[3]

Nombre del proyecto	Inversión actualizada (S/ millones)	Problema
Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, CajamarcaTrujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N	S/ 1,045	Las obras están paralizadas. Está pendiente adquisición de predios y liberación de interferencias en zonas urbanas de Cutervo, Sto. Domingo de la Capilla y Chiple.
Hidrovía Amazónica: Mejoramiento y Mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los Ríos Ucayali, Huallaga, Marañon y Amazonas	S/ 434	No se cuenta con los estudios técnicos (estudios de sedimentación e impacto ambiental) para continuar con la ejecución del proyecto.
Chavimochic (Tercera Etapa)	S/ 3,149	La Etapa III del Proyecto comprende la Presa Palo Redondo, la cual está a un nivel de avance del 70% y se encuentra expuesta a deterioros a causa de cambios climáticos. El proyecto se encuentra paralizado, pendiente de definir arbitrajes y la continuidad del proyecto.
Majes Siguas (Segunda Etapa)	S/ 2,019	El proyecto requiere la incorporación de un cambio tecnológico en el sistema de distribución y riego de las pampas, mediante modificación contractual.
Red Vial N° 4: Pativilca-Santa-Trujillo y Puerto Salaverry	S/ 1,111	Está pendiente la adquisición de predios y liberación de interferencias de las Obras Obligatorias Evitamiento Chimbote, Evitamiento Virú, Evitamiento Casma, Evitamiento Huarmey, Intercambio vial Salaverry, veinte (20) puentes peatonales y nueve (9) pasos a desnivel.

Fuente: Propia.

De la misma manera, a diciembre de 2021, se identificaron cinco (5) proyectos de APP en ejecución que presentaban un lento avance financiero, representando el 9,6% (S/ 8,903 millones) de la inversión total de la cartera del sector transportes:

Cuadro 2

Proyectos de APP del Sector Transportes con lento avance financiero a diciembre de 2021[4]

Proyectos	Inicio de concesión	Inversión ejecutada a jul. 2019 (%)	Inversión ejecutada a dic. 2021 (%)	% Avance financiero de jul. 2019 a dic. 2021
Ampliación Muelle Norte	2011	42,9%	47,4%	4,5%
Hidrovía Amazónica	2017	0,8%	0,8%	0,1%

Fuente: Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1543.

[3] La información señalada ha sido extraída de la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1543.

[4] La información señalada ha sido extraída de la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1543.

Cuadro 3

Proyectos de APP del Sector Transportes con lento avance financiero a diciembre de 2021[5]

Proyectos	Inicio de concesión	Inversión ejecutada a jul. 2019 (%)	Inversión ejecutada a dic. 2021 (%)	% Avance financiero de jul. 2019 a dic. 2021
Red vial N° 4	2009	57,2%	80,1%	22,8%
Longitudinal de la Sierra T2	2014	72,0%	82,8%	10,8%
Ampliación Muelle Sur	2006	46,9%	54,1%	7,2%

Fuente: Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1543.

Asimismo, a diciembre de 2021, se identificaron los siguientes datos interesantes[6]:

- Los sectores que tuvieron los menores niveles de avance fueron los de agricultura, transportes, saneamiento y ambiente, con carteras de cuatro (4) proyectos por S/ 5,644 millones, veintiséis (26) proyectos por S/ 95,657 millones y seis (6) proyectos por S/ 5,412 millones, respectivamente.

- En el período transcurrido entre agosto de 2019 y diciembre de 2021, los proyectos priorizados presentaron dificultades en las tres fases identificadas en el PNIC: ejecución, proceso e idea.

- Por brindar un ejemplo, de los treinta (30) proyectos en fase de ejecución, doce
(12) avanzaron menos de 15% a pesar de que durante el período de tiempo evaluado se dictaron una serie de medidas para promover el desarrollo de proyectos priorizados en el PNIC.

- De los cincuenta y dos (52) proyectos priorizados en el PNIC, en fase de proceso, veintidós (22) aún no logran entrar a fase de ejecución y tres (3) proyectos de la cartera de Proinversión, fueron declarados desiertos (Repotenciación de LT Carabayllo, Chimbote y Trujillo; Ferrocarril Huancayo Huancavelica; y, Masificación del Gas en 7 regiones del país).

- En relación con los proyectos en fase de idea, uno de los proyectos que se encontraba en idea no ha sido promovido en esos dos (2) años y medio, a pesar de que el PNIC requería el compromiso

[5] La información señalada ha sido extraída de la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1543.
[6] La información señalada ha sido extraída de la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1543.

sectorial para iniciar la ejecución de los proyectos en un plazo máximo de cinco (5) años.

En ese contexto, el 28 de noviembre de 2019 se publicó el Decreto de Urgencia N° 018- 2019, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para la promoción e implementación de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (en adelante, el "DU 018-2019").

En la Exposición de Motivos del DU 018-2019, se reconoció que las causas más frecuentes de retraso en la implementación de los proyectos de inversión están dadas, en particular, aunque sin ser exclusivo, en lo relacionado con: (i) la entrega de terrenos,
(ii) levantamiento de interferencias, (iii) otorgamiento y/u obtención de licencias, permisos y títulos habilitantes para la ejecución de los proyectos, (iv) descoordinaciones en la zonificación de las áreas necesarias para ejecutar los proyectos y (v) la incompatibilidad entre proyectos ejecutados por una misma entidad pública o en una misma área.

Por ello, se establecieron medidas extraordinarias con una vigencia de tres (3) años, tendientes a:

a) Exceptuar de las licencias de habilitación urbana o de edificación para la ejecución de los proyectos priorizados en el PNIC y los proyectos complementarios.
b) Establecer la obligación de las entidades públicas de compatibilizar y, preferir la ejecución de los proyectos priorizados en el PNIC.
c) Disponer responsabilidad administrativa disciplinaria para los funcionarios que incumplan con dar una excepción en la tramitación de títulos habilitantes municipales relacionados a los proyectos priorizados del PNIC.
d) En los casos que resulte aplicable, las entidades públicas titulares de los proyectos priorizados puedan fijar de manera directa el valor de tasación de los inmuebles necesarios para la ejecución de los proyectos a su cargo.
e) Obligación de contar con un registro previo de las interferencias existentes en el área de influencia de un determinado proyecto.
f) Posibilidad de asignar a las entidades titulares de proyectos priorizados, las labores de liberación de interferencias.
g) La ejecución de proyectos complementarios al PNIC y autorización de transferencias financieras.
h) Contratación de obras y servicios para la adquisición de áreas y liberación de interferencias en los proyectos priorizados en el PNIC y sus proyectos complementarios.
i) Realizar reportes mensuales de avance de los proyectos priorizados.
j) Declaración de necesidad y utilidad pública e interés nacional, la cual tiene una vigencia permanente.
k) Medidas para garantizar la eficacia y predictibilidad de los procedimientos ambientales.

l) Medidas para garantizar la celeridad y predictibilidad a los procesos de intervenciones arqueológicas.
m) Declaración de servicio público del transporte ferroviario público de pasajeros.

De la misma manera, el 08 de enero de 2020 se publicó el Decreto de Urgencia N° 003- 2020, Decreto de Urgencia que establece disposiciones extraordinarias para la adquisición y liberación de áreas necesarias para el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (en adelante, el "DU 03-2020").

En la Exposición de Motivos del DU 03-2020, se identificó que, en los casos de proyectos viales bajo la modalidad de APP, se presentó de manera recurrente el problema de liberación de predios desde el inicio de la ejecución de obras, lo cual ha generado un
retraso en la ejecución de las obras principales y como consecuencia un impacto negativo directo e indirecto sobre la economía del país:

- El impacto directo: el efecto sobre la economía y el empleo que ha tenido el retraso en la ejecución de inversiones por la demora de liberación de predios.

- El impacto indirecto: costo total por concepto de personas heridas y fallecidas en accidentes que pudieron haberse evitado, si se hubieran puesto en operación las obras previstas de mejoramiento de las vías durante 2014 y 2015.

Cuadro 4

Estimación del perjuicio económico por la demora en la liberación de predios

Monto en Millones de soles	
Impacto directo	1539
Impacto indirecto	250
Total[9]	**1789**

Fuente: OSITRAN

El 11 de mayo de 2020, con la publicación del Decreto Legislativo N° 1500, Decreto Legislativo que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el impacto del COVID-19 (en adelante, "DL 1500") se establecieron las siguientes medidas:

a) Ampliación del alcance de las medidas extraordinarias reguladas en el DU 018- 2019.
b) Vigencia de títulos habilitantes y de las certificaciones ambientales.
c) Participación en el acompañamiento en la elaboración de la línea base del Estudio de Impacto Ambiental.
d) Mecanismos de participación ciudadana.
e) Reportes de información de carácter ambiental.
f) Procedimiento de fraccionamiento y aplazamiento de la exigibilidad del pago de multas impuestas por el Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
g) Modificaciones de la actividad a consecuencia del Estado de Emergencia Nacional.

Al respecto, nos interesa destacar que en la Exposición de Motivos del DL 1500, se reconoció la necesidad de que las medidas extraordinarias, aprobadas mediante el DU 018-2019, se apliquen también a: (i) los proyectos complementarios de los proyectos priorizados en el PNIC, de competencia nacional, regional y local; y, (ii) a los proyectos de inversión desarrollados mediante la modalidad de APPs, bajo la titularidad de las entidades públicas del Gobierno Nacional, que se encuentren en la fase de ejecución contractual, con condición de adjudicados o que se adjudiquen dentro del periodo de vigencia del DU 018-2019.

Pues, se evidenció que en la práctica los proyectos priorizados en el PNIC requerían la ejecución de proyectos complementarios para ser puestos en valor y poder explotar de manera eficiente todo su potencial en materia de competitividad. Algunos de los proyectos complementarios identificados fueron:

Cuadro 5

Monto de inversión proyecto PNIC – Proyectos complementarios

Proyecto PNIC	Proyecto Complementario	Monto de inversión USD
1. Terminal de Contenedores Muelle Sur - DP World	• Acceso del Ferrocarril Central al Terminal Portuario del Muelle Sur	-
2. Terminal Multipropósito Muelle Norte – Callao APM Terminals Callao	• Acceso Ferroviario que conecta la vía férrea con el Terminal Norte Multipropósito del Callao	5,364,930
5. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Chira	• Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador	1,670,370,203
	• Renovación del Colector Circunvalación	64,000,000
6. Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima	• Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en los distritos de Ate y Santa Anita de la provincia de Lima – Departamento de Lima	599,643,820
	• Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del distrito de Lurín	478,734,014
	• Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Esquema Quebrada de Manchay – 2da Etapa distrito de Pachacamac, Distrito de Villa María del Triunfo, Distrito de La Molina	283,626,108
	Total	**3,410,914,164**

Fuente: Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada - MEF.

Además de ello, se reconoció que existían otros proyectos de APP que, si bien no estaban como priorizados en el PNIC, requerían también una excepción en las materias reguladas por el DU 018-2019. Estos proyectos son:

Cuadro 6

Otros proyectos de APP (no priorizados en el PNIC) que requieren excepción

N°	Nombre del Proyecto de APP no priorizado en el PNIC	Avance	Dificultades
1	Red Vial Tramo Vial: Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica	La concesión cuenta con 221 km de longitud dividida en tres etapas las cuales, a noviembre del 2019, acumulan un avance físico de 160 kilómetros, lo que representa el 75% con respecto a lo comprometido.	Las obras pendientes de ejecutar corresponden a las Etapas 2 y 3. La Etapa 2 registraba un avance del 96.58% a fines del 2018, mientras que la Etapa 3 se encuentra paralizada desde mayo del 2016. Para poder culminar las obras se encuentra pendiente la adquisición de predios y liberación de interferencias.

2	Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil, Tramo 5: Matarani - Azángaro - Juliaca	La concesión cuenta con 854 km de longitud y dos obras adicionales, la Segunda Calzada Puno - Juliaca que consiste en la construcción de 48 kilómetros y el Puente de Loripongo y Malcomallo. Las obras comprometidas según contrato correspondientes al propio Tramo 5, así como a las del puente Loripongo y Malcomallo ya se han construido quedando pendiente culminar la obra adicional de la Segunda Calzada Puno - Puno Juliaca valorizada en USD 86 millones, la cual, a noviembre del 2019, acumula un avance físico de 29 kilómetros lo que representa el 61% con respecto a lo comprometido.	El proyecto ha venido presentando dificultades para realizar de forma oportuna la adquisición de predios y liberación de interferencias de tramos continuos.
3	IIRSA Centro Tramo 2	La concesión contempla inversiones en obras de ensanche, puentes peatonales y construcción de variantes, sin embargo, estas no se realizan en tanto no se logre contar con la liberación de los predios.	Liberación de los predios.

4	Panamericana Sur Ica - Frontera con Chile: Tramo Vial Desvío Quilca – Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia	La concesión establece la obligación de ejecutar obras, mantener y operar 428 km de tramo vial y construir 74 kilómetros de segunda calzada, de los cuales, a noviembre del 2019, se acumula un avance físico de 10 km, lo que representa el 14% con respecto a lo comprometido.	Las obras pendientes de ejecutar han presentado problemas vinculados con la entrega de áreas libres de afectaciones, predios e interferencias.
5	Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa el Salvador -Av. Grau - San Juan de Lurigancho	El proyecto cuenta con dos tramos que juntos acumulan una distancia de 34 km y atraviesan 11 distritos.	El proyecto contempla la posibilidad de requerir inversiones en nuevas estaciones.
6	El Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú	El proyecto incluye 12 aeropuertos, de los cuales solo los aeropuertos de Piura y Trujillo forman parte de los proyectos priorizados del PNIC.	A pesar de que todos los aeropuertos responden a una misma naturaleza, solo 2 de 12 están sujetos a las medidas extraordinarias del DU 018-2019.
7	Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú.	Situación similar al primer grupo de aeropuertos.	Situación similar al primer grupo de aeropuertos.

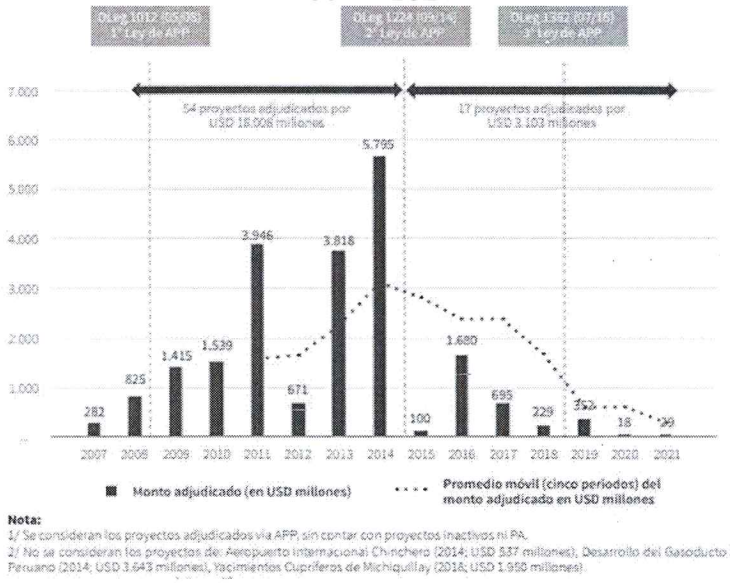
Fuente: Propia.

Posteriormente, con la publicación del Decreto Legislativo Nº 1538, Decreto Legislativo que establece disposiciones especiales para la ejecución de las inversiones públicas, publicado el 26 de marzo de 2022, en el Diario Oficial El Peruano; se tiene por objeto establecer disposiciones especiales para la ejecución de las inversiones públicas, así como, alinear las disposiciones en materia de desarrollo urbano a la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Así, se establecen medidas relacionadas a las licencias de habilitación urbana o de edificación tendientes a que las entidades de los tres niveles de gobierno puedan iniciar la ejecución de las obras solo con el cargo de recepción del expediente de licencia. De la misma manera, se regula lo relativo a la certificación ambiental e información para la elaboración de estudios ambientales para proyectos de inversión pública.

Ahora bien, nos resulta relevante citar lo establecido por el Consejo Privado de Competitividad en su Informe de Competitividad 2022 del 31 de marzo de 2022[7], respecto de los proyectos bajo la modalidad de APP. Pues, dicho informe reconoce que, "*si bien en el periodo 2008-2014 se adjudicaron 54 proyectos por más de USD 18 mil millones - llegando a un máximo de USD 5.795 millones en 2014 -, desde 2015 a la fecha, la cantidad de adjudicaciones ha venido reduciéndose significativamente - se adjudicaron 17 proyectos por USD 3.103 millones -. Y, en el año 2021, se adjudicaron solo dos proyectos por USD 29 millones*", conforme se evidencia en el siguiente cuadro:

Gráfico 1

Inversión adjudicada y promedio móvil de APP a nivel nacional (USD millones), 2007 – 2021



Nota:
1/ Se consideran los proyectos adjudicados vía APP, sin contar con proyectos inactivos ni PA.
2/ No se consideran los proyectos de: Aeropuerto Internacional Chinchero (2014; USD 537 millones), Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano (2014; USD 3.643 millones), Yacimientos Cupríferos de Michiquillay (2018; USD 1.950 millones).

Fuente: Proinversion 2021

De acuerdo con el gráfico, el Consejo Privado de Competitividad demuestra que el periodo exitoso en proyectos de APP se corresponde con la vigencia del Decreto Legislativo N° 1012 (2008-2014), mientras que el periodo de caída sistemática coincide con el inicio del Decreto Legislativo N° 1224 y sus modificaciones posteriores. Así, resalta que las razones de dichas caídas sistemáticas del número de adjudicaciones son las siguientes:

1. La reconcentración de las labores de evaluación y aprobación de APP hacia el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en detrimento de las facultades y competencias de Proinversión como ente rector del proceso de APP.

[7] El Informe de Competitividad 2022, se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1bxg3vbu3V5lPLKzMzm-PcWn71HLVhbNV/view

2. La poca claridad en las competencias dadas hacia los organismos reguladores (que solo deberían enfocarse en temas tarifarios, de facilidades esenciales y de calidad del servicio) y hacia la Contraloría General de la República (CGR) (que es la capacidad presupuestal para cumplir los compromisos fiscales) a la hora de opinar tanto sobre versiones finales de los contratos como sobre las adendas.

Asimismo, el Consejo Privado de Competitividad señala que en el Informe de Competitividad 2021, se especificaron las causas que generaban las demoras en las adjudicaciones y ejecución de proyectos de APP, las mismas que tienen vigencia a la actualidad:

- La doble evaluación del Informe Multianual de Inversiones en APP (IMIAPP), que genera un 50% más de procesos en esta fase de las APP.

- La exigencia de formular una APP en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), mediante la elaboración de un proyecto de inversión pública (PIP). Pues, esto lleva a las unidades formuladoras de los sectores a elaborar el PIP con un enfoque inicial de obra pública, mayormente enfocado en el análisis de costo unitario, el cual es distinto al utilizado para APP, en donde el análisis se centra en los niveles de servicio requeridos. Así, además, se duplican esfuerzos ya que el análisis técnico vuelve a realizarse durante la elaboración del informe de evaluación (IE) requerido para culminar la fase de formulación de la APP.

- La poca claridad en las competencias individuales de los actores que participan en el proceso (sector, Proinversión, MEF, reguladores y CGR) durante la fase de estructuración y transacción —que comprende la estructuración económico- financiera, la asignación de riesgos y el diseño del contrato hasta la apertura al mercado— tiene como consecuencia mayores retrasos en la adjudicación de los proyectos.

- La cantidad de actores que emiten opinión para aprobar una APP, lo que afecta la calidad de los contratos por la multiplicidad de opiniones.

Para ello, el Consejo de Competitividad reconoció que el Perú constituye uno de los países con la mayor cantidad de actores que participan en procesos APP, conforme se evidencia de la siguiente imagen:

Imagen 1

Países de la región según número de entidades públicas que participan en las fases de una APP



Fuente: Contraloría General de Colombia, 2016

En ese marco, al 20 de octubre de 2022, se identificó que el Perú tiene US$ 19.600 millones en su cartera de proyectos a través de APPs, Obras por Impuestos y Acuerdos Gobierno a Gobierno; donde 24 de los proyectos son promocionados por Proinversión por medio de APPs con una inversión estimada de US$7.400 millones en ocho (8) sectores económicos, conforme se muestra en la infografía siguiente de La República[8]."*Es una cifra relevante para no solamente cerrar las brechas en infraestructura, sino para generar un efecto dinamizador y multiplicador en el empleo*", dijo Manuel Rivera, líder de Impuestos de EY Perú[9].

[8] Cuadro, Fernando (2022). Perú tiene US$ 19.600 millones en su cartera de proyectos. En La República. Consultado el 19 de enero del 2023. Link: https://larepublica.pe/economia/2022/10/20/inversion-peru-tiene-us196-millones-en-su-cartera-de-proyectos- plan-nacional-de-infraestructura-mef-kurt-burneo-g2g

[9] Cuadro, Fernando (2022). Perú tiene US$ 19.600 millones en su cartera de proyectos. En La República. Consultado el 19 de enero del 2023. Link: https://larepublica.pe/economia/2022/10/20/inversion-peru-tiene-us196-millones-en-su-cartera-de-proyectos- plan-nacional-de-infraestructura-mef-kurt-burneo-g2g

Imagen 2

Radiografía del portafolio de inversiones en infraestructura



Fuente: Noticia – La República

Teniendo en cuenta el contexto anterior, debemos señalar que el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025 (en adelante, "PNISC 2022-2025)", aprobado mediante el Decreto Supremo N° 242-2022-EF, publicado el 24 de octubre de 2022 en el Diario Oficial El Peruano, deriva de la actualización del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 2019-2022.

Al igual que el PNIC 2019-2022, el PNISC 2022-2025 constituye un instrumento que organiza, prioriza, consolida y articula la planificación de las distintas entidades públicas en materia de inversiones. Además, con el PNISC 2022-2025, el Perú se alinea con estándares internacionales de sostenibilidad de infraestructura, incluidos los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Al respecto, el PNISC 2022-2025 establece que se encuentra pendiente que se implemente e interiorice, principalmente en el sector público, el concepto de infraestructura sostenible en el desarrollo de proyectos, desde el planeamiento hasta la ejecución de estos. Además, se debe mejorar el diagnóstico, la visión y la estrategia de los sectores sobre su infraestructura encargada, con un

énfasis en la medición de los indicadores de sostenibilidad de cada proyecto priorizado.

Como resultado de la metodología aplicada, el PNISC 2022-2025 ha priorizado setenta y dos (72) proyectos que cumplen con la evaluación de infraestructura sostenible, cuyo monto de inversión es de S/ 146,622 millones, de los cuales S/ 127,662 millones se encuentran pendientes de ejecutar, lo que representa el 15% del PBI. Según el PNISC 2022-2025, la cartera priorizada permitirá impulsar la recuperación económica del Perú y se puede agrupar de la siguiente manera:

a) Distribución de proyectos priorizados por modalidad, donde se aprecia que, de los 72 proyectos priorizados, 26 corresponden a la modalidad de APPs con un total de inversión de S/ 74,062 millones de un total de S/ 146,622 millones.

Cuadro 7

Distribución de proyectos priorizados por modalidad

Modalidad de ejecución		Proyectos	Inversión (millones de soles)
Asociaciones Público Privadas	Autofinanciado	6	15,254
	Cofinanciado	20	58,808
Obra pública[149]		37	58,617
Proyectos en Activos		9	13,943
Total		**72**	**146,622**

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF

b) Por fases, por medio del cual se aprecia que, del total de proyectos priorizados en la modalidad de APPs, 10 se encuentran en la fase de formulación, 10 en la fase de ejecución contractual, 4 en la fase de estructuración y 2 en la fase de transacción.

Cuadro 8

Distribución de proyectos priorizados por fases

Modalidad de ejecución	Fase de ejecución	Proyectos	(millones de soles)
Asociaciones Público Privadas	Formulación	10	31,291
	Estructuración	4	5,388
	Transacción	2	1,049
	Ejecución contractual	10	36,336
Obra pública	Formulación y Evaluación	1	701
	Ejecución	36	57,916
Proyectos en Activos	Planeamiento y Programación	1	415
	Formulación	4	6,756
	Estructuración	0	0
	Transacción	3	3,932
	Ejecución contractual	1	2,841
Total		**72**	**146,622**

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF

A la par, cabe resaltar que, según el Informe Ejecutivo Semestral de Gestión Enero - junio 2022 de la Contraloría General de la República del Perú[10], dicha entidad culminó setenta y dos (72) servicios de control previo relacionado a las opiniones previas sobre la ejecución de adicionales de obra, adicionales de servicios de supervisión, endeudamiento, Asociación Público-Privadas (APP), Obras por Impuestos (Oxl) y en adquisiciones con carácter de secreto militar u orden interno:

Cuadro 9

Servicios de control previo (enero a junio de 2022)

Tipo de control	Nacional	Regional	Local	Total
Sobre adquisiciones y contrataciones con caracter de secreto militar	3	--	--	3
Sobre presupuestos adicionales de obra	5	--	1	6
Sobre presupuestos adicionales - servicios supervision	5	--	1	6
Sobre operaciones de endeudamiento	12	8	37	57
Total general	**25**	**8**	**39**	**72**

Fuente: Sistema de Control Gubernamental (Actualizado al 30 de junio de 2022)

Asimismo, conforme lo establece el Informe Ejecutivo - Análisis de la inversión pública desde la perspectiva del control gubernamental 2017 - 2021 de la Contraloría General de la República[1110], se ha reconocido que el porcentaje de ejecución de 72 proyectos por modalidad de APPs es de 64.9%; una de las cifras más bajas, junto con las modalidades por contrata, administración directa más otra modalidad, entre otros, conforme al siguiente detalle:

Cuadro 10

Inversiones ejecutadas en el marco del invierte.pe según modalidad de ejecución, 2017-2021

Etiquetas de fila	N° inversiones	(%)	PIM 2017-2021	Devengado 2017-2021	% ejecución
Adm. Directa	45 565	41.8%	37 721 576 955	27 869 109 968	73.9%
Por Contrata	58 775	53.9%	161 873 441 039	102 594 615 442	63.4%
Adm. Directa más otra modalidad	2 943	2.7%	1 717 300 436	1 127 281 081	65.6%
APP / Concesiones	72	0.1%	2 806 186 532	1 822 412 911	64.9%
Convenio con Organismos Internacionales	17	0.0%	1 878 698 779	1 452 318 190	77.3%
Endeudamiento	3	0.0%	197 260	131 769	66.8%
Modalidad mixta indirecta	82	0.1%	19 354 860	15 419 997	79.7%
No se encuentra información	689	0.6%	126 385 052	78 702 650	62.3%
Núcleos Ejecutores	701	0.6%	293 424 913	236 731 161	80.7%
Obras por impuesto	270	0.2%	2 531 583 083	2 097 560 912	82.9%
Total	**109 117**	**100.0%**	**208 968 148 909**	**137 294 284 082**	**65.7%**

Fuente: Consulta Avanzada, Banco de Inversiones – Ministerio de Economía y Finanzas

[10] Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/3338538-informe-ejecutivo-semestral-de- gestion-enero-junio-2022.

[11] Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/3338537-informe-ejecutivo-analisis-de-la- inversion-publica-desde-la-perspectiva-del-control-gubernamental-2017-2021.

De la misma forma, se muestra el siguiente cuadro de obras paralizadas según nivel de gobierno y modalidad de ejecución, dentro de los cuales se encuentra la modalidad de APPs:

Cuadro 11

Obras paralizadas según nivel de gobierno y modalidad de ejecución

Modalidad de Ejecución	Gobierno Nacional		Gobierno Regional		Gobierno Local		Total			
	N°	Costo Actualizado S/.	N°	Costo Actualizado S/.	N°	Costo Actualizado S/.	N°	%	Costo Actualizado S/.	%
Administración Directa	31	158 406 090	106	1 115 470 104	1 244	2 322 510 048	1 381	58.3%	3 596 386 241	16.02%
Por Contrata	213	3 402 029 774	165	5 976 496 348	469	4 117 481 157	847	35.8%	13 496 007 279	60.11%
Obras por impuesto	1	32 527 857	1	27 434 979	1	9 650 948	3	0.1%	69 613 784	0.31%
APP / Concesiones			4(*)	5 168 008 564			4	0.2%	5 168 008 564	23.02%
Núcleos Ejecutores	134	123 278 201					134	5.7%	123 278 201	0.55%
Total	**379**	**3 716 241 920**	**276**	**12 287 409 995**	**1 714**	**6 449 642 153**	**2 369**	**100.0%**	**22 453 294 069**	**100.00%**

Fuente: Infobras – Contraloría General de la República

Adicionalmente, se reconoce las obras que, estando paralizadas al cierre del 2021, no cuentan con recepción. Dentro de ellas se aprecia que, de un total de 112 proyectos de APPs, 92 no cuentan con recepción:

Cuadro 12

Obras finalizadas según modalidad y registro de recepción

Modalidad de ejecución	Tiene Recepción		Total
	No	Si	
Por Contrata	11 392	32 493	43 885
Adm. Directa	14 587	16 395	30 982
Núcleos Ejecutores	314	1 205	1 519
Obras por impuesto	54	175	229
APP / Concesiones	92	20	112
Conv. C/Org. Inter.	5	18	23
Total	**26 444**	**50 306**	**76 750**

Fuente: Infobras – Contraloría General de la República

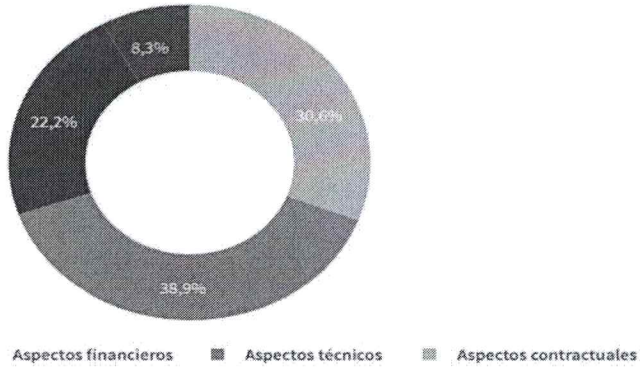
La relación de las APP con los sistemas de control del Estado ha sido un punto de vista importante para el Consejo Privado de Competitividad, que, de acuerdo con su Informe de Competitividad 2022[1211], del 31 de marzo de 2022, ha reconocido que las tendencias del 2021 siguen vigentes.

Así, señala que "*a la luz de los análisis previos se observaba que las opiniones del órgano de control excederían el marco legal y consolidarían a la vez con el principio de discrecionalidad en la decisión de los funcionarios*". *De esa manera, identifica que "de una muestra de nueve informes de control previo durante el periodo 2017-2020, se encontró que el 91,7% de las observaciones descritas en los referidos informes se relacionan con aspectos técnicos y/o de costos del proyecto, mas no con la capacidad financiera del Estado para cumplir sus compromisos de financiamiento*", conforme al siguiente gráfico:

[12] Disponible en el siguiente link: https://www.compite.pe/tipo-publicacion/informe-nacional/

Gráfico 2

Análisis de opiniones de la Contraloría General de la República en el marco de una APP, 2017-2021



Fuente: La Contraloría General de la República

En base a ello, el Consejo Privado de Competitividad reconoce en su Informe de Competitividad 2022[12], que para comparar la actuación de la Contraloría General de la República (CGR) dentro del proceso de APP, se efectuó un análisis de las competencias que tienen los órganos de control dentro de los procesos de APP en otros países de América Latina, cuyos resultados fueron que "*en varios de los países que implementan APP exitosas la participación de los órganos de control se ciñe a la legalidad del proceso (Chile y Uruguay) o a la absolución de problemas existentes en las bases del concurso de licitación (Costa Rica y Panamá)*":

Cuadro 13

Tipo de control en el marco de una APP, según países de la región

PAÍS	TIPO DE CONTROL
Chile	Legalidad
Colombia	Técnico y legalidad
Perú	Técnico y legalidad
El Salvador	Técnico y legalidad
Costa Rica	Legalidad (validación de bases administrativas)
Uruguay	Legalidad
México	No participa. Se hace control interno por parte de la entidad
Panamá	Legalidad (establecimiento de fianzas y refrendo del contrato)
Paraguay	Técnico (compromisos fiscales) y legalidad (revisión de bases)

Fuente: La Contraloría General de la República

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el 12 de octubre de 2022, se presentó el Proyecto de Ley Nº 3273/2022-PE, "Ley que establece medidas extraordinarias para la promoción e implementación de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad"; cuyo objeto consiste en ampliar las medidas establecidas en el DU 018-2019 con aplicación a las entidades públicas del Gobierno Nacional titulares de los proyectos

priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022 - 2025, así como a los Gobiernos Regionales y Locales. Así, se pretende implementar al PNISC 2022-2025, lo siguiente:

a) Exceptuar de la obligación de obtención de las licencias de habilitación urbana o de edificación de manera previa a la ejecución de los proyectos priorizados en el PNISC.
b) Establecer la obligación de las entidades públicas de compatibilizar y, de no ser posible, preferir la ejecución de los proyectos de inversión priorizados en el PNISC frente a los demás proyectos a su cargo o títulos habilitantes en trámite, indistintamente de la fase en la que se encuentren.
c) Establecer que las entidades públicas pertenecientes al sector público no financiero, bajo responsabilidad, tienen la obligación de otorgar prioridad a los proyectos a desarrollarse mediante APP, en la valoración y trámites respecto del cumplimiento de los requisitos para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones que se requieran para el inicio y continuación de obras.
d) Para los proyectos priorizados en el PNISC, y en los casos en los que resulte aplicable, las entidades públicas titulares de los mismos puedan fijar de manera directa el valor de tasación de los inmuebles necesarios para la ejecución de los proyectos a su cargo.
e) La información que sea recabada por las entidades titulares de los proyectos deba ser derivada a la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE).
f) Aprobar la relación de proyectos complementarios para el PNISC.
g) Adquisición de áreas y liberación de interferencias.
h) Reportes mensuales de avance de los proyectos.
i) Imposición de servidumbres.
j) Medidas para garantizar la eficacia y predictibilidad de los procedimientos ambientales.
k) Medidas para garantizar la celeridad y predictibilidad a los procesos de intervenciones arqueológicas.
l) Garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios.

A la fecha, se ha reconocido que "*para salir del entrampamiento se debe eliminar esta suerte de "opinionitis" que no contribuye a la eficiencia del proceso ni calidad de los proyectos. Otro punto importante es que las coordinaciones y avances con las entidades comprometidas, no pueden retroceder cada vez que cambian a los funcionarios encargados. Se debe empoderar a ProInversión para que no dependa de una dirección general del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)*".[13]

De la misma manera, el Consejo Privado de Competitividad, a través de su

[13] Artica Pérez, Javier. (2023). "Hay cinco proyectos entrampados de ProInversión por más de US$ 4,800 millones". En, Diario Gestión, 18 de enero.

Informe de Competitividad 2022, del 31 de marzo de 2022[14], ha señalado como propuesta para los proyectos de APPs, lo siguiente:

1. Crear un marco normativo integral que regule la promoción de la inversión privada mediante APP, considerando la participación de los distintos actores en sus fases, conforme a lo siguiente:

   - Primero, en cuanto al planeamiento y programación, se requieren ajustes en el Decreto Legislativo 1362 (Ley de APP) y en el Decreto Supremo 240-2018-EF (Reglamento de APP).

   - Segundo, respecto a la formulación, además de los cambios en las normas descritas, se necesitan cambios en el Decreto Legislativo 1252 (Ley Invierte.pe), el Decreto Supremo 284-2018-EF (Reglamento del Invierte.pe) y la Directiva 001-2019-EF (Directiva General del Invierte.pe).

   - En la estructuración y transacción, es preciso cambiar la Ley de APP, así como su reglamento, para permitir que Proinversión vuelva a ser el encargado de liderar el proceso, haciendo que los demás actores opinen estrictamente en el marco de sus competencias, sin generar duplicidades de opinión.

- En paralelo, se deben efectuar cambios en la normatividad que reglamenta la actuación de los organismos reguladores ya que tanto en la Ley Marco (artículo 3 de la Ley 27332) como en las leyes específicas se mantiene la generalidad sobre sus competencias. Lo anterior se condice conforme a las siguientes tablas:

Cuadro 14

Propuesta de participación de los actores, según etapa de APP

ETAPA	ENTIDADES	PROPUESTA (APROBACIÓN)
Planeamiento y programación	Entidad concedente (EC)	• EC → El IMIAPP debe ser aprobado a nivel de cada sector para eliminar la evaluación adicional por parte del MEF.
Formulación	Proinversión y EC	• Proinversión → Elabora el IE con información de la EC y lo aprueba con el visto bueno de la EC.
Estructuración	Proinversión	• Proinversión → Elabora estudios técnicos especializados, análisis inicial de riesgos, modelación financiera, versión inicial de contrato y bases.
Transacción	Proinversión, MEF, Reguladores y CGR	• Proinversión → Elabora la versión final de contrato y bases finales. • MEF → Opina sobre la capacidad presupuestal y pasivos firmes/contingentes. • Reguladores → Opina sobre tarifas, facilidades esenciales y calidad del servicio. • CGR → Opina sobre los aspectos que comprometan la capacidad financiera del Estado referidos al cofinanciamiento, garantías o compromisos firmes o contingentes cuantificables del proyecto.

Fuente: La Contraloría General de la República

[14] El Informe de Competitividad 2022, se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1bxg3vbu3V5lPLKzMzm-PcWn71HLVhbNV/view

Cuadro 16

Propuesta de cambios normativos para organismos reguladores

NORMA	ARTÍCULOS POR CAMBIAR
Decreto Legislativo 1362 (Ley de APP)	Artículos 41 y 57,1
Ley 26917 (Ositran)	Artículo 7
Ley 26734 (Osinergmin)	Artículo 5
Decreto Legislativo 1280 (Sunass)	Artículo 79,7
Ley 27336 (Osiptel)	Artículo 2

Fuente: La Contraloría General de la República

2. Mayor claridad en el rol de la Contraloría General de la República.

   Así, se propone que la CGR circunscriba sus opiniones a los aspectos que comprometan la capacidad financiera del Estado referidos al cofinanciamiento, garantías o compromisos firmes o contingentes cuantificables del proyecto. Se sugiere que esto vaya acompañado por medidas que debería tomar la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP) del MEF en su función de ente rector del SNPIP, al generar informes que permitan definir los documentos que sirven de sustento a la toma de decisiones de los funcionarios públicos, reforzando el concepto de discrecionalidad.

3. Fortalecer el rol de Proinversión como ente rector del proceso APP.

   Se propone fortalecer las competencias de Proinversión como unidad central de APP, que incorpore las principales competencias y responsabilidades del proceso de formulación, estructuración y transacción de las APP. Para ello, Proinversión debería cumplir con los siguientes criterios:

   - Como unidad APP, concentrar el conocimiento especializado en APP. Incluye construcción de capacidades y la facultad para emitir las políticas y/o lineamientos especializados en APP.

   - Prestar servicios como estructurador y adjudicador de las APP para todo el Gobierno/todo sector, con la autonomía técnica para aprobar directamente las bases, la versión final de contrato y la adjudicación del proceso, con las opiniones de MEF, reguladores y CGR luego de aclaradas las competencias de acuerdo con la propuesta de tener un marco normativo que regule el proceso de APP, considerando la participación de los distintos actores en sus fases.

Ahora bien, nos resulta relevante, para la identificación de los problemas en la gestión de proyectos, reseñar los puntos más importantes de la

consultoría realizada por ARUP, Mace y Crossrail Internacional[1515]:

- Las Entidades Públicas Titulares de Proyectos (en adelante, "EPTP") deberían desarrollar las habilidades de gestión necesarias para ejecutar programas y proyectos complejos de manera efectiva.
- Las EPTP deben implementar un enfoque de gestión de programas y adecuando, sus estructuras organizaciones (tradicionalmente funcionales y enfocadas únicamente en proyectos individuales).
- Establecer oportunidades de mejora en el régimen de gobernanza, a efectos de precisar los roles y las responsabilidades y evitar retrasos en la toma de decisiones.
- Fortalecer la confianza y predictibilidad en el proceso de toma de decisiones durante la formulación y ejecución de proyectos, lo cual puede lograrse mejorando la transparencia y la comunicación oportuna de riesgos y problemas durante dichas fases.
- Las EPTP deberían desarrollar una estrategia de comunicación estructurada que ponga énfasis en las partes interesadas.
- Importancia de desarrollar procesos de transferencia de capacidades y experiencias dentro de las EPTP.

Adicionalmente, nos resulta oportuno reseñar un estudio de la Association of Project Managers Group (APMG), toda vez que, muestran una serie de recomendaciones en relación con las APPs como opción potencial para la contratación de infraestructura pública:

Cuadro 17

Qué hacer y qué no hacer en proyectos de APP[16]

CUADRO 1.20: Qué Hacer y qué No Hacer (Dos and Don'ts)	
Hacer (*Does*)	**No Hacer (Dont's)**

Fuente: Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento - Banco Mundial

[15] La referida consulta no se encuentra pública, por ello, hemos extraído la información de la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1543.

[16] Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento - Banco Mundial (2016). "Guía de la Certificación en Asociaciones Público- Privadas de APMG". pp. 89-91.

Cuadro 18

Qué hacer y qué no hacer en proyectos de APP

EMDEs, LDCs: Adaptar la estrategia APP a tu contexto político, social y económico bajo principios de prudencia y realismo.	EMDEs, LDCs: No planificar ni anunciar programas APP ambiciosos que puedan estar por encima de tu potencial (en términos de asequibilidad y acceso a financiamiento e inversión internacional). Nunca definir/seleccionar proyectos no realistas, y en particular no especificar el uso de tecnologías no confiables o no testeadas.
Seleccionar proyectos apropiados.	No usar APP para proyectos pequeños (como regla general). Tratar de agrupar/juntar proyectos pequeños (por ejemplo, un grupo de platas de tratamiento de aguas mejor que contratarlas mediante procesos separados.
Seleccionar candidatos APP apropiados. Mirar por las eficiencias inherentes de las APPs, maximizarlas y protegerlas.	No usar las APP simplemente porque no se va a contabilizar como deuda pública. No usar APP como opción salvo que el proyecto sea susceptible de ser una APP, esto es, que se considera probable que capture las eficiencias esperadas (el capítulo 3 aporta información sobre como chequear un proyecto como candidato adecuado a APP). Usar el proceso APP cuando el proyecto proporciona VpD y la opción APP refuerza el VpD (ver el capítulo 4 para más información sobre el análisis VpD).
Reconocer los recursos tan demandantes que requiere la herramienta APP y el proceso de licitación APP, y estar preparados en términos de capacidades. Las APPs requieren una cantidad significativa de participación del gobierno durante todas las etapas de su ciclo de vida.	No embarcarse en un proceso APP salvo que se sepa o reconozca las capacidades específicas/especiales y recursos necesarios, así como la mayor complejidad del proceso. En muchos países, las instituciones responsables del desarrollo de las APPs enfrentan enormes restricciones y tienen grandes deficiencias. Sin embargo, se espera de ellas que produzcan programas y proyectos que demandan un nivel de especialización y esfuerzo por encima de sus capacidades.
Estudiar/analizar proyectos en detalle para asegurar su factibilidad	No lanzar un proyecto APP a menos que se esté seguro de su factibilidad global y de sus factibilidades específicas, esto es, que el proyecto está preparado y satisfactoriamente analizado en términos técnicos financieros, comerciales, de asequibilidad y técnicos (el capítulo 4 trata por entero de las necesidades y alcance de la evaluación de proyectos)
Dedicar recursos a estructurar adecuadamente la licitación y el contrato, y a gestionar el proceso.	No creer que la evaluación lo es todo. El VpD inherente puede perderse a través de una estructuración inadecuada o diseño/redacción poco clara. El proceso de licitación debe facilitar la mayor competencia efectiva posible con los requerimientos de cualificación (el capítulo 5

Fuente: Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento - Banco Mundial

De la misma manera, el estudio de la APMG, nos proporciona un resumen de los tipos de fracasos de proyectos y los factores comunes de gestión de proyectos que pueden comprometer el resultado de los proyectos de APPs,

conforme lo siguiente:

Cuadro 19

Resumen de Tipos de Fracasos de Proyectos[17]

CUADRO 1.29: Resumen de Tipos de Fracasos de Proyecto

Teniendo en cuenta el momento en que ocurre y la severidad del fallo:

- Durante preparación, estructuración, o durante la licitación.
  - El proceso es retrasado debido a que debe ser redefinido y/o reevaluado (y re licitado si estaba ya en fase de licitación).
  - El proyecto es definitivamente cancelado.
- Durante la vida del contrato.
  - Terminación/cancelación temprana del contrato.
  - Pérdida parcial en términos de VpD.

Fuente: Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento - Banco Mundial

Cuadro 20

Factores comunes de gestión de proyectos y gobernanza que pueden comprometer el resultado de los proyectos de APPs[18]

CUADRO 1.30: Factores comunes de Gestión de Proyectos y Gobernanza que Pueden Comprometer el Resultado del Proyecto en APP (como en cualquier proyecto gubernamental)

- Falta de capacidad de gestión y de habilidades adecuadas (falta de recursos capacitados y falta de fondos para contratar asesores).
- Falta de continuidad/frecuentes cambios en el equipo de proyecto.
- Falta de una clara propiedad (*ownership*) y liderazgo del proyecto.
- Fallo en la toma y gestión de las decisiones (insuficiente delegación de poderes o interferencias externas).
- Falta/ ausencia de un "campeón" (*champion*) del proyecto.
- Falta de un abogado "independiente" y sin conflicto.
- Falta de mecanismos de control de calidad adecuados.
- Fallos en identificación de los grupos de interés (*stakeholders*).
- Fallos en comunicación (interna, externa, al público -procurando aceptación del proyecto o manejando la resistencia frente al mismo, y a los inversores)
- Fracaso en asegurar que el proyecto encaja en los objetivos estratégicos del gobierno o cambios en los objetivos del gobierno
- Urgencia política o manejo de tiempos no realistas.

Fuente: Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento - Banco Mundial

C) LAS DIFERENCIAS ENTRE EL ESTADO Y EL PARTICULAR Y SU REPERCUSIÓN EN LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO

En el año 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó el documento "*Reflexiones sobre la importancia de la gestión de contratos de APP y sus posibles carencias en la región*"[19], en el cual efectuó un diagnóstico sobre

[17] Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento - Banco Mundial (2016). "Guía de la Certificación en Asociaciones Público- Privadas de APMG". p. 137.

[18] Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento - Banco Mundial (2016). "Guía de la Certificación en Asociaciones Público- Privadas de APMG". pp. 138.

[19] Yitani, José, et. al. "Reflexiones sobre la importancia de la gestión de contratos de APP y sus posibles carencias en la región". Banco Interamericano de Desarrollo, 2021.

los avances, retrocesos y oportunidades de mejora en América Latina y el Caribe respecto de la gestión de contratos de APP. De acuerdo con el documento[20], una buena gestión de un contrato público, especialmente uno de APP, requiere de los siguientes elementos:

(i). un buen reglamento contractual, es decir, uno que cuente con las herramientas y la "flexibilidad acotada" para adaptarse a los cambios y hacer frente a amenazas de forma eficiente;

(ii). gestores capacitados en habilidades y conocimiento de "Project Management", puesto que se apreció en la región una falta de preparación de las administraciones contratantes para asumir las tareas de las diversas etapas del contrato;

(iii). una actitud colaborativa y transparente, lo cual resulta coherente con el carácter de "asociación" o "partnership" del proyecto, además de contar con mecanismos de transparencia de la información y rendición de cuentas;

(iv). una institucionalización eficiente, que permita delimitar claramente las competencias de los actores gubernamentales involucrados.

Respecto del cuarto elemento, es decir, la actitud colaborativa por parte de las autoridades, los autores del informe identificaron una tendencia del gobierno, propietario del proyecto y último responsable frente a los ciudadanos, a desapegarse del proyecto.

Esta actitud se extiende en muchas ocasiones a la responsabilidad en el manejo de los riesgos, incluso aquellos que fueron transferidos al privado colaborador, y provoca "que en muchas ocasiones se entre en incumplimiento (especialmente hablamos de retrasos de construcción) teóricamente culpable, pero que no hubiese acaecido con una actitud más colaborativa por parte del socio público". Usualmente esas situaciones de incumplimiento creadas por la falta de una actitud colaborativa se deben a la indisponibilidad del terreno, la obtención de licencias (entre ellas, ambientales) o la receptividad del proyecto por parte de las comunidades en el área de influencia[2121].

A mayor ahondamiento, se ha reportado que la indisponibilidad de terrenos para la ejecución de proyectos es un obstáculo histórico para el desarrollo de infraestructura en Latinoamérica. Por ejemplo, según datos recogidos por Suárez Alemán et. al., el conflicto en torno a los predios puede traducirse en costos hasta del 80% del presupuesto, generando retrasos de 1 a 13 años[22].

---

https://publications.iadb.org/es/reflexiones-sobre-la-importancia-de-la-gestion-de-contratos-app-y-sus- posibles-carencias-en-la.

[20] Ibidem, págs. 23 – 29.

[21] Ibidem, pág. 34.

[22] Castrosin, Maria del Pilar, et. al. "Priorización de proyectos de asociaciones público-privadas en infraestructura económica y social: elementos clave, herramientas y mejores prácticas para el desarrollo de asociaciones público-privadas en infraestructura". Banco Interamericano de

Ello se agrava en aquellos casos en que se efectúa una transferencia de estos y otros riesgos al privado, sin que esto venga acompañado de la intervención o gestión del poder público, el cual es el único que tiene la potestad expropiatoria, o cuenta con mejores insumos para adoptar acuerdos con las entidades ambientales y las comunidades afectadas a fin de evitar la paralización de las obras, la terminación anticipada del contrato o retrasos perjudiciales. Así, pues, de acuerdo con el documento, la actitud conciliadora del gobierno resulta esencial para la solución de los desacuerdos y la viabilidad de una correcta ejecución contractual.

Si bien, el Perú (al igual que Colombia) son líderes en la región en cuestión de estandarización de criterios de distribución de riesgos, se debe superar la usual perspectiva que equipara asignación de riesgos con desapego contractual, de tal forma que la parte pública, aunque no esté a cargo de un riesgo en concreto, es llamada a colaborar intensamente con su contraparte privada para asegurar el bienestar del proyecto.

Ahondando en la falta de espíritu colaborativo de la parte pública, el documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) detecta que un problema enraizado en los sistemas de cooperación público-privada "es la falta de conciencia sobre la relevancia de la función de la gestión contractual y su necesidad de institucionalizarla. Esto se manifiesta claramente en la ausencia de guías de gestión contractual para APP en la región, la necesidad de reconocimiento de un perfil profesional especializado, o la falta de ensamblaje de la función de gestión de estos contratos en la gobernanza y en el ciclo de proyecto general de las APP con un involucramiento estable y estructurado de agencias centrales".

Este problema enraizado tiene todo que ver con el enfoque fiscalizador y parcializado que usualmente tienen las entidades contratantes respecto del contrato de colaboración, dando prioridad al cumplimiento de obligaciones medios, cuando convendría más bien un enfoque holístico, integral y que diera prioridad a los resultados y cumplimiento de objetivos. Ello obedece pues, a que los proyectos de APP difieren en su complejidad, duración y repercusión en el bienestar social de los contratos de gestión directa o convencional. Un contrato puede contar con un diseño adecuado, pero si ello no viene acompañado por una gestión proactiva que haga frente al desapego del proyecto y que priorice la consecución de resultados y el cumplimiento de objetivos, se corre el riesgo de padecer grandes pérdidas en términos de bienestar social[23].

Lo anterior es posible solo dentro de un marco de flexibilidad acotada, que dote a la autoridad contratante de herramientas de gestión y maniobra más amplias que los usuales mecanismos de persecución y sanción de conductas. De esta forma, el vínculo contractual se debe enfocar a la promoción de la alineación de los intereses públicos y privados en juego y que representen incentivos para

[23] Ibidem, pág. 22.

ambas partes. Por ello, el documento recomienda que "que la gestión del proyecto, a plasmarse en el contrato, tenga en cuenta el equilibrio entre, la necesidad de regular conductas y la forma de prestación de los servicios, y el mantenimiento de cierto nivel de flexibilidad"[24], un escenario que no se ha visto con frecuencia en la región.

A este respecto, se aprecia cómo un aspecto importante en la vida de los proyectos de APP es la forma de su terminación, cuyas reglas no siempre son del todo claras. Por esta razón, el informe del BID propone que todo contrato debe contar con reglas de terminación claras que definan expresamente los siguientes aspectos:

- Los incumplimientos esenciales que darán derecho a la terminación anticipada
- La distinción entre incumplimientos esenciales y materiales
- La previsión de un plazo considerable para la remediación de la inejecución previo a ejercer el derecho de terminación,
- El otorgamiento a los prestamistas del derecho de *step in*; y,
- La descripción objetiva de la compensación por terminación anticipada del contrato.

Pese a todo lo anterior, se verifica que el Perú tiene un alto índice, no solo de conflictividad social, sino también de controversias entre los particulares y el Estado en contextos de contratos públicos.

Información publicada por la Contraloría General de la República (CGR) en los últimos años, muestra que una de las principales causas de paralización de obras públicas es la ocurrencia de discrepancias, controversias, que culminan en arbitrajes. El Reporte de paralización de obras públicas del 2019 indica que en dicho año se registraron 867 obras paralizadas, de las cuales, 242 lo fueron a causa de haberse entablado un arbitraje. Este número aumentó en julio de 2022, alcanzando un total de 2346 obras paralizadas, de las cuales 117 (un 5% del total) no avanzaron por la misma causa. Finalmente, a diciembre de 2022 existen 1879 obras públicas[25] paralizadas en el territorio nacional, correspondientes a los tres niveles de gobierno. De ese total, 111 (2.8%) se encuentran detenidas a causa de discrepancias, controversias y arbitrajes.

Aunque las cifras han disminuido en términos porcentuales respecto del total en los últimos años, es necesario tener en cuenta que muchas de las controversias culminan en contratos resueltos, proyectos truncos, los cuales se traducen en una pérdida de bienestar social. Esto refleja que la ocurrencia de controversias durante la fase de ejecución de proyectos que culminan en

[24] Ibidem, pág. 73.

[25] En el término de "obra pública" se engloba a toda "construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación, mantenimiento, habilitación y rehabilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos, cuya ejecución, operación o mantenimiento implique la participación del Estado y forma parte de una inversión, sea por contrata, administración directa, convenios, Asociaciones Público-Privadas, Obras por Impuestos, mixtos, y cualquier otra modalidad de ejecución que se establezca"

arbitraje es una de las principales causas de la paralización de proyectos o de su frustración.

De otro lado, el portal Ojo Público reportó a octubre de 2022 sobre 17 megaproyectos inconclusos, los cuales costaron un total de S/ 9 millones en pérdidas. De estas obras once se encuentran inconclusas debido a que las empresas contratistas incurrieron en incumplimientos debido a expedientes técnicos deficientes y la mayoría de ellas se encuentran en arbitrajes[26].

Este panorama a nivel nacional, se replica a nivel internacional. El Estado peruano es miembro del Convenio CIADI desde el año 1993. Este mecanismo constituye la via usual para el arreglo de controversias relativas a inversiones internacionales, instaurando un sistema de arbitraje inversor-Estado.

En este escenario, es preciso tener en cuenta que el Perú es uno de los estados que registra mayor cantidad de demandas ante el CIADI. En efecto, el Perú fue el país que más denuncias recibió ente los años 2020 y 2021, disminuyendo dicho ritmo en 2022, año en que registró una demanda contra el Estado peruano y otra contra PeruPetro S.A. Si comparamos en cifras al Perú con otros países de América Latina y el Caribe, se apreciará lo siguiente:

Cuadro 21

Cifras de arbitrajes CIADI por país en la región

Casos arbitraje CIADI por país			
País	**Pendientes**	**Concluidos**	**Total**
Argentina	9	47	56
Venezuela	14	39	53
Perú	23 (*)	18	41
México	13	24	37
Colombia	13	6	19
Chile	2	4	6

(*) Considerando el caso registrado contra Perupetro S.A.

Como se aprecia, pues, las tensiones entre el particular colaborador y la administración contratante constituye un obstáculo considerable para el avance de los proyectos de infraestructura y de inversión en general. Por ello, resulta esencial poner atención al sistema de solución de controversias regulado en el régimen de APPs y, en general, de la colaboración público-privada, de tal forma que impere el espíritu colaborador y se logra distender las tensiones entre las partes del contrato desde estadios tempranos de su ocurrencia, lo que

[26] Montaño, Fiorella. "Obras pendientes: 17 megaproyectos inconclusos suman más de S/9 mil millones". Ojo Público, 23 de octubre de 2022. https://ojo-publico.com/3822/millonarias-obras-pendientes-17- megaproyectos-inconclusos-regiones.

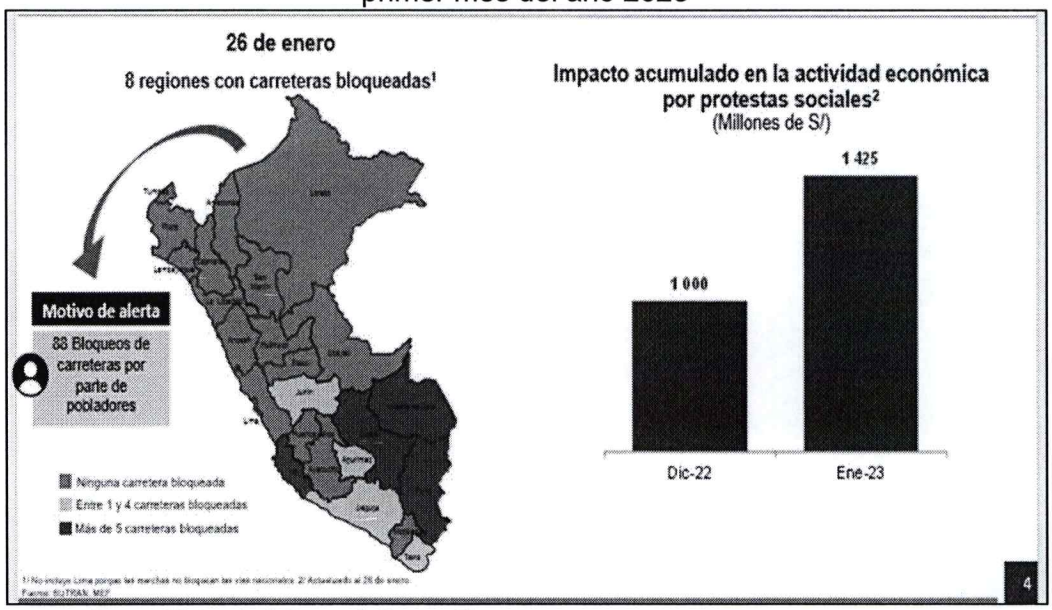
privilegiará la continuidad de la ejecución contractual.

D) CONTEXTO ECONÓMICO Y NECESIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE APP A ENERO DE 2023

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, se ha identificado que, a enero de 2023, existe un alto impacto acumulado en la actividad económica por las protestas sociales relacionadas al entorno político actual. Así se demuestra del siguiente cuadro de la presentación "Con Punche Perú"[27]:

Imagen 3

Afectación de la actividad económica debido a las protestas sociales en el primer mes del año 2023



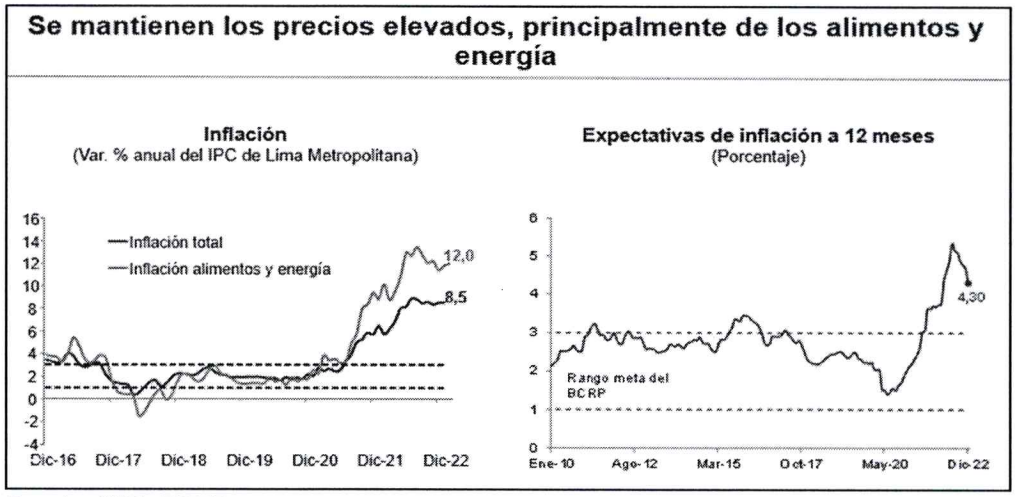
Fuente: Ministerio de Economía Banca y Finanzas

Asimismo, se identifica que se mantienen los precios elevados principalmente de los alimentos y energía:

[27] Programa lanzado por el Ministerio de Economía y Finanzas el 29 de diciembre de 2022. Link: https://www.gob.pe/institucion/mef/campa%C3%B1as/19312-plan-de-reactivacion-economica-con-punche-peru

Gráfico 3

Precios elevados principalmente en alimentos y energía

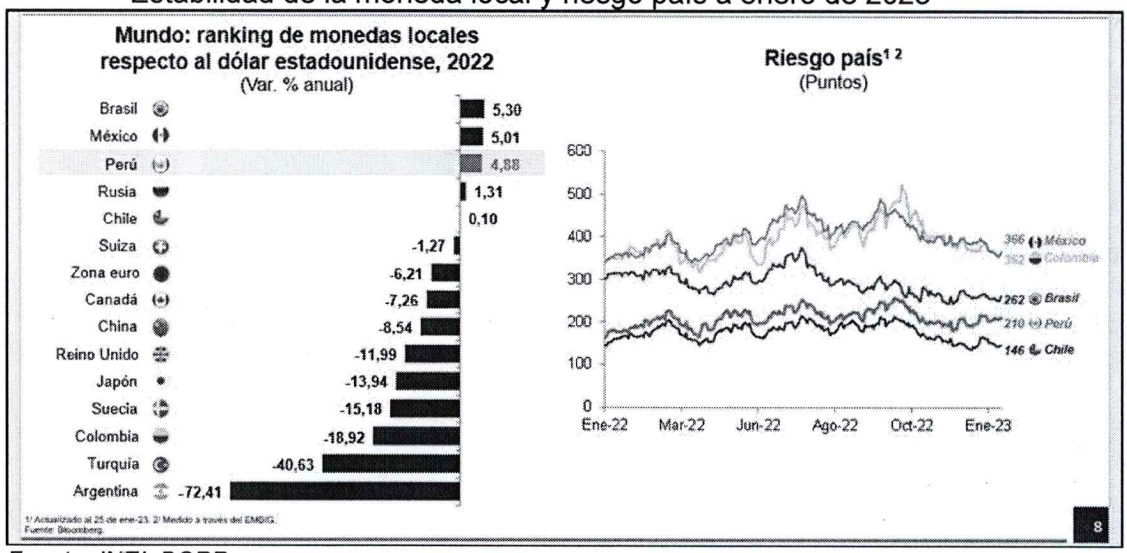


Fuente: INEI, BCRP

No obstante, advierte el Ministerio de Economía y Finanzas, pese al contexto la moneda local y el riesgo país se ha mantenido estable:

Gráfico 4

Estabilidad de la moneda local y riesgo país a enero de 2023



Fuente: INEI, BCRP

Ante ese contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas ha solicitado la delegación de facultades para continuar impulsando la reactivación de la economía. Así, uno de los ejes que nos interesa destacar corresponde al "Impulso a la inversión pública y privada", el cual está compuesto por lo siguiente:

Cuadro 22

Eje de impulso a la inversión pública y privada del programa "Con Punche Perú"

1.	**Mejoras en la gestión de inversiones**	• Simplificación de procesos para la obtención de licencias, habilitación urbana, y certificación ambiental. • Flexibilizar los plazos para la expropiación de bienes inmuebles y liberación de interferencias. • Acompañamiento del MEF para la implementación de estándares internacionales de dirección de proyectos. • Asistencia técnica para la ejecución de inversiones de los gobiernos regionales y locales de mayor pobreza beneficiarios de los concursos FIDT. • Optimizar la gestión de predios e interferencias en proyectos de inversión: agilizar la adquisición y disponibilidad de terrenos, liberación de interferencias. • Optimizar el procedimiento, evaluación y sustento de la capacidad presupuestal para proyectos de APP.
2.	**Impulso a las inversiones**	• Ejecución de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR) con recursos del canon, sobrecanon, regalías mineras y FOCAM. • Medidas extraordinarias para promover 72 proyectos priorizados del PNISC y otros proyectos. • Autorizar el uso excepcional de recursos de endeudamiento para financiar intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), como las intervenciones de Reconstrucción en Inversiones (IRI) e Inversiones IOARR. • Permitir a los gobiernos locales la suscripción de convenios con los Proyectos Especiales de inversión Pública (PEIP) para la ejecución de sus inversiones. • Habilitar financiamiento adicional de proyectos de Obras por Impuesto (OxI).

3.	**Principales beneficios de las medidas**	• Agilizar la ejecución de S/ 127 mil millones en proyectos del PNICS, equivalentes a 15% del PBI correspondientes a los 10 sectores priorizados. • Optimizar el procedimiento de la capacidad presupuestal para proyectos de APP, se busca una reducción del plazo de 18 meses aproximadamente. • Facilitar la ejecución de inversiones de los gobiernos locales a través de convenios de Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP). • Agilizar las inversiones que estén bajo el mecanismo "fast track" dado que se podrá iniciar gestiones solo con los estudios de preinversión declarados viables y no esperar a tener los estudios técnicos culminados. • Asegurar el adecuado funcionamiento de 15 hospitales en 5 regiones y 74 colegios en 8 regiones.

Fuente: Propia

Al respecto, debemos señalar que, desde la publicación del Quincenario N° 308, del 31 de octubre de 2022, de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN)[28], se reconoce que la brecha en infraestructura aún es enorme y que la misma se ha visto incrementada por la pandemia y la coyuntura política. Así, pese a las modificaciones realizadas a la normativa de APP, aún persiste aspectos por reforzar. Por ejemplo, el proceso de opiniones, el cual sigue siendo largo y lento al incluir una serie de actores como la entidad titular del proyecto, el Ministerio de Economía y Finanzas, los Organismos Reguladores, la Contraloría General de la República, etc. Así también, se evidencia que existen mecanismos ya regulados que, pese a no ser tan recientes, aún no han sido debidamente implementados o utilizados como la Junta de Resolución de Disputas.

En el Quincenario Nº 313[29], de fecha 31 de enero del 2023, AFIN identificó que solo 20 de 58 hospitales públicos, adjudicados entre 2010 y 2022, se encuentran culminados. Así pues, identifica que 27 hospitales se encuentran en ejecución de los cuales 7 de ellos fueron retomados luego de resolución de contrato. Asimismo, que 7 hospitales se encuentran paralizados, uno de los cuales es un saldo de obra de un contrato resuelto; y, 4 hospitales se encuentran con contrato resuelto, donde solo uno se encuentra en proceso de contratación. Dichas cifras, como ejemplo de un sector, demuestra que la infraestructura pública en la actualidad sigue siendo un reto enorme, más aún teniendo en cuenta la coyuntura política.

Teniendo en cuenta el panorama descrito, se hace indispensable implementar medidas para promover la agilidad y la eficiencia en la tramitación de los

[28] Fernández Dávila, Ronald. (2022). Asociaciones Público-Privadas (APP) en el Perú, ¿qué falta para avanzar? Pp. 26-28.

[29] Disponible en el siguiente link: https://afin.org.pe/wp-content/uploads/2015/12/quincenario-313.pdf

procesos de inversión privada, a fin de que ello repercuta en un mayor bienestar social, lo cual se concretará en modificatorias e incorporaciones al Decreto Legislativo Nº 1362 que girarán en torno a los siguientes ejes:

- Fortalecimiento del rol de Proinversión:

  Proinversión es el organismo técnico-especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas con personería jurídica de derecho público, perteneciente al nivel de gobierno nacional, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, encargado de la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas, Proyectos en Actos y Obras por Impuestos destinados a la prestación de servicios públicos, construcción de infraestructura pública, generación de activos, proyectos y empresas del Estado. El rol de Proinversión resulta esencial para la activación de la inversión privada en el Perú.

  Sin embargo, en la actualidad el actuar de Proinversión se ve obstaculizado por la regulación del proceso de promoción privada, especialmente en las fases de estructuración y transacción, debido a la duplicidad de opiniones por parte de distintos actores, y la posibilidad de verse relegado del proceso incluso luego de habérsele encargado la conducción de este. Por ello, es necesario revalorar su posición de liderazgo en el proceso a través de la eliminación de la duplicidad de opiniones y participación innecesaria de entidades externas al proceso.

- Eliminación de opiniones previas del Ministerio de Economía y Finanzas a excepción de aquella previa a la Versión Final del Contrato

  Actualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas emite opinión previa vinculante en cada fase del proceso de promoción sobre distintos aspectos, lo cual, se ha comprobado ralentiza y vuelve más engorroso el trámite del proceso.

  El Ministerio de Economía y Finanzas a través de su rol rector orienta a las entidades en la adecuada aplicación de la normativa de APPs. Por ello, resulta innecesario que, adicionalmente, emita opiniones previas, al interior de cada proceso de promoción privada en cada fase, lo cual se limitará a la Versión Final del Contrato.

- Establecer la responsabilidad funcional a aquellos funcionarios que no acaten lo establecido por la normativa de APP.

  Se dispone la responsabilidad de funcionarios y servidores públicos ante la inobservancia de las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1362, a fin de que las disposiciones dirigidas a brindar mayor agilidad y eficiencia en la tramitación de los procedimientos sean efectivas.

- Restricción de las opiniones e informes de los organismos reguladores.

  El papel que cumplen los organismos reguladores es importante, aunque la regulación actual carece de claridad para delimitar sus competencias, el grado o la forma de intervención en los procesos de promoción de la inversión privada. Para ello, se propone limitar la intervención de los organismos reguladores a la emisión de opiniones no vinculantes relativas a materias de su competencia y a aspectos relacionados a las tarifas, facilidades esenciales y calidad de servicio.

- Esclarecer el rol de la Contraloría General de la República en el proceso de promoción, así como el alcance de su intervención en función de sus competencias.

  La Contraloría General de la República cumple un papel importante en los procesos de inversión privada, especialmente en aquellos proyectos de Asociación Público-Privada cofinanciadas. Pese a ello, sus competencias con relación al proceso no se encuentran adecuadamente definidas, razón por la cual es indispensable circunscribir sus opiniones a los aspectos que comprometan la capacidad financiera del Estado referidos al cofinanciamiento, garantías o compromisos firmes o contingentes cuantificables del proyecto.

- Derogar los lineamientos y las opiniones previas emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, actualizándolos a la nueva normatividad.

  Actualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas emite lineamientos y opiniones previas vinculantes en ejercicio de sus competencias, sin embargo, a partir de la nueva normativa vigente con la modificación a realizarse al Decreto Legislativo N° 1362, tales lineamientos deben ser derogados, con el fin de uniformizar toda la regulación de los proyectos de Asociación Público Privada a partir de nuevos lineamientos que no contradigan lo dispuesto en la Ley de APPs.

- Establecer una regla sobre la liberación de predios, quedando ello en manos de la entidad titular del proyecto, pudiendo acordarse que esté a cargo del inversionista, para lo cual, se le otorgará las facultades necesarias.

  En la actualidad, muchos proyectos de Asociación Público Privadas o en Activos quedan paralizados por la indisponibilidad de los terrenos. Es por eso que resulta necesario contemplar una regla específica que regule a cargo de qué parte (Estado o inversionista) se encuentra la responsabilidad de la liberación de los terrenos.

Asimismo, dado que se puede establecer contractualmente que las defensas posesorias estén a cargo del inversionista, es necesario dotarle de herramientas para la defensa del área del proyecto, principalmente, aquellas que el Código Civil y el Código Procesal civil.

- Regular un procedimiento especial en caso de aplicarse el supuesto de caducidad que permita la contratación de interventores temporales, privilegiando con ello la continuidad del proyecto.

  Se debe privilegiar la culminación del proyecto por encima de cualquier controversia o diferencia entre las partes. Por ello, se contempla la regla por la cual las entidades titulares pueden proceder a la contratación de terceros interventores que gestionen o administren el proyecto hasta diez años. Igualmente, se dispone que la liquidación del contrato por caducidad se puede diferir hasta la culminación de la etapa o fase de ejecución en que se encuentre.

- Hacer permanente y ampliar las medidas extraordinarias del Decreto de Urgencia Nº 018-2019, para todos los proyectos de Asociación Público Privadas y proyectos en Activos.

  Las medidas dictadas a partir del Decreto de Urgencia Nº 018-2019 para promover la inversión privada representan una gran utilidad y conviene regularlas como permanentes. Por ello, se ha implementado como permanentes aquellas medidas enmarcadas en dicho decreto de urgencia a fin de dinamizar los procesos de promoción de la inversión privada, y contar con herramientas eficientes para lograr ese fin.

- Establecer la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas en la etapa de trato directo en controversias internacionales.

  Actualmente, el Perú es uno de los países con más demandas promovidas por inversionistas ante el CIADI, y una considerable cantidad de proyectos se ven paralizados debido a los arbitrajes iniciados en contra de las entidades públicas. Para ello es necesario implementar mejoras a fin de que la fase de trato directo entre el Estado y el particular prospere y se evite el inicio de un procedimiento arbitral. Una medida necesaria para efectivizar la etapa de trato directo en las controversias internacionales es introducir una segunda fase de esta etapa en la que el trato directo se efectuará con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Estas medidas se traducen en las siguientes modificaciones e incorporaciones:

- Modificación del inciso 5.6 del artículo 5

  En concordancia con la limitación de la intervención del MEF en los

procedimientos de promoción de la inversión privada, se propone armonizar el inciso 5.6 con la nueva redacción del artículo 41, en el sentido de que el ministerio solo emitirá opiniones previas respecto de la Versión Final del contrato, respecto de las materias enlistadas en el referido inciso.

- Modificación del inciso 9.2, e incorporación del inciso 9.4 al Artículo 9:

  Como parte de las competencias del Ministerio de Economía y Finanzas, y dada la importancia de contar con información actual y centralizada del avance de los proyectos de inversión en los tres niveles de gobierno, se modifica el artículo 9.2 a fin de garantizar que las entidades titulares de proyectos atiendan los pedidos de información efectuados por el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión del Ministerio, así como que efectúen reportes sobre los principales aspectos relacionados con el desarrollo e implementación de los proyectos de Asociación Público-Privada y proyectos en Activos. De la misma forma, resulta necesaria la publicación de la información y de indicadores de avance de proyecto de manera periódica por parte del Equipo Especializado.

- Incorporación del Artículo 10.A:

  Se exonera a los proyectos de Asociación Público-Privada y Proyectos en Activos de la exigencia de contar con licencias de habilitación urbana o de edificación, previéndose para el caso en que los proyectos recaigan sobre bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, la necesaria autorización sectorial por parte del Ministerio de Cultura. Asimismo, se dispone que las obras de habilitación urbana o de edificación se deben regularizar por medio del procedimiento dispuesto en el Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA. Además, se establece que las obras ejecutadas vinculadas a bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación solo pueden ser regularizados por el Ministerio de Cultura, por medio del procedimiento excepcional aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2022-MC. Finalmente, se establece el carácter automático de los procedimientos administrativos para la obtención del Certificado de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y Licencia Municipal de Funcionamiento.

- Modificación del Artículo 11:

  Se dispone la efectivización y potenciación de la discrecionalidad de las entidades públicas que tienen a su cargo la aprobación, opinión, conducción, ejecución, supervisión y fiscalización, en cualquiera de las fases de los proyectos, estableciéndose su actuación discrecional sin incurrir en responsabilidad y limitando la intervención de la Contraloría General de la República a la verificación de la

existencia del sustento de la decisión discrecional.

- Modificación del inciso 12.9 del Artículo 12:
  Con el fin de potenciar el rol de Proinversión, se dispone que, una vez el proyecto de Asociación Público-Privada y en Activos le es encargado o la Iniciativa Privada es declarada de relevancia, el proyecto solamente puede ser excluido por decisión del Consejo Directivo de Proinversión.

- Modificación del inciso 15.1 del Artículo 15:

  Se excluye la exigencia de elevar el Informe de Evaluación, Plan de Promoción, Bases, Versión Inicial del Contrato previa a la fase de Transacción, Versión Final del Contrato y sus respectivas modificaciones sustanciales, Declaratoria de Interés, así como los actos dispuestos por el Consejo Directivo para su ratificación o aprobación, siendo que detiene el trámite del proceso y niega competencias de los comités especiales.

- Modificación del inciso 21.2 del Artículo 21:

  Se otorga la facultad al inversionista de recurrir a los mecanismos de defensa y tutela de la posesión incluso cuando no se le reconozca un derecho real respecto los bienes públicos sobre los que recaigan los proyectos de Asociación Público Privadas, pudiendo recurrir a las disposiciones pertinentes del Código Civil y el Código Procesal Civil.

- Incorporación de los incisos 30.6, 30.8 y 30.9 al Artículo 30:

  Mediante esta modificación se establece que, para los casos en que las áreas necesarias para le ejecución de los proyectos de Asociación Público Privada y Proyectos en Activos coincidan total o parcialmente con otros proyectos de alcance nacional, regional o local, las entidades públicas actúan conforme a sus competencias y de acuerdo a la normativa aplicable para compatibilizar o levantar cualquier carga reserva o afectación que impida, limite o restrinja el otorgamiento de autorizaciones o el uso de las áreas de dominio público o privado necesarias, disponiendo las medidas necesarias para permitir la continuidad de los proyectos de inversión privada.

  Además, se busca la mayor eficiencia posible en el levantamiento de las afectaciones, cargas, reservas o proyectos de titularidad de las entidades públicas y su compatibilización con la ejecución y continuidad del proyecto. Para ello se delega al reglamento la previsión de los plazos máximos dentro de los cuales las entidades proceden con la compatibilización o levantamiento de afectaciones, cargas, reservas o proyectos.

- Incorporación del Artículo 30.A:

Mediante la incorporación de esta disposición se busca brindar mayor autonomía a las entidades públicas titulares de proyectos para la fijación directa del valor de tasación de los inmuebles necesarios para la ejecución de los proyectos a su cargo, conforme a Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución de obras de Infraestructura. Así, pues, se prevé que las entidades pueden contratar los servicios de peritos que cuenten con la debida inscripción en el Registro de Peritos Valuadores (REPEV) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en el Registro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, o en el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, disponiéndose la responsabilidad civil, penal y administrativa de estos por el alcance de sus informes. Además, se dispone la vinculatoriedad de las tasaciones efectuadas por peritos para la entidad, de forma que no pueda apartarse de ellas. Asimismo, se faculta a las partes del contrato a acordar que el inversionista efectúe el pago del monto tasado al titular del predio objeto de expropiación, con cargo a que dicha suma sea le reembolsada. Finalmente, se establece la aplicación del Reglamento Nacional de Tasaciones y demás normativa vigente a la tasación.

- Incorporación del Artículo 30.B:

  La indisponibilidad de predios y terrenos es una de las principales causas de paralizaciones o inviabilidad de proyectos de Asociación Público Privadas y en Activos, y una de las principales causas de su frustración. De ahí la necesidad de prever mecanismos para promover la eficiencia en la liberación de terrenos. Por ello, se faculta a las entidades titulares de los proyectos para financiar o ejecutar directamente las actividades e intervenciones necesarias para la liberación de los terrenos.

- Incorporación del Artículo 30.C:

  Se excluye del alcance de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, la contratación de obras y servicios que efectúen las entidades titulares de proyectos para la adquisición de áreas y liberación de terrenos en ejecución de lo dispuesto en el artículo 30, inciso 30.3, del Decreto Legislativo Nº 1362. Al mismo tiempo, se extiende el régimen sancionador de normativa general de contrataciones públicas a los contratistas que intervengan en la contratación de dichas obras y servicios, con las excepciones de los literales e), l) y n) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, se otorga al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la facultad de decidir por la aplicación del artículo 30.C del Decreto Legislativo Nº

1362 o por la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura

- Modificación del inciso 32.2 del Artículo 32:

  Se dispone que, en el caso de las Asociaciones Público-Privadas cofinanciadas, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones debe emitir una directiva que regule la fase de formulación del proyecto de inversión, además de estar reguladas por el Informe de Evaluación.

- Incorporación del inciso 34.3 al Artículo 34:

  La modificación del inciso 34.3 obedece a la necesidad de incluir mecanismos para el fomento de la competencia, transparencia e integridad, y para la disuasión de actos de corrupción, con lo cual se busca mitigar la presentación de ofertas temerarias. En ese sentido, se establece la suspensión de la adjudicación de la buena pro, cuando la propuesta económica no supere el porcentaje mínimo del valor máximo a ofertar, lo cual deberá ser establecido en las bases. Cuando ello suceda, será el Comité el que procederá a la revisión y validación del modelo económico financiero del postor. Finalmente, se dispone que el procedimiento se reanudará con la decisión del comité de validar o descartar la propuesta económica del postor.

- Incorporación del Artículo 35.A:

  Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de inversión privada, es preciso prever incentivos para que la organización de cada entidad pública actúe en función de la efectividad y la eficiencia. Por ello, se ha previsto la incorporación del artículo 35.A, que contempla la responsabilidad administrativa o funcional a lo largo del procedimiento.

- Modificación de los incisos 41.4 y 41.6 del Artículo 41.4

  Se modifica el inciso 41.4 con el fin de armonizar su contenido con el artículo 8.B. Además, se modifica el inciso 41.6 a fin de que las entidades que emiten opiniones en alguna etapa o sobre un determinado acto o paso del procedimiento, efectúen en una única oportunidad todas las observaciones que correspondan.

- Incorporación del Artículo 41.A:

  Este dispositivo hace permanente las medidas extraordinarias dictadas por el Decreto de Urgencia N° 018-2019 relativas a la

efectividad, predictibilidad y seguridad jurídica en los procesos inversión sobre materia ambiental

- Incorporación del Artículo 41.B:

  Este dispositivo hace permanente las medidas extraordinarias dictadas por el Decreto de Urgencia N° 018-2019 relativas a la celeridad y predictibilidad en los procesos en materia arqueológica. Se dispone además la regulación específica de la tramitación de los procesos en materia arqueológica por el Reglamento y la sujeción de los plazos de aquellos al silencio administrativo positivo.

- Modificación de los incisos 43.1 y 43.2 e incorporación del inciso 43.3 del Artículo 43:

  En aras de agilizar y promover la eficiencia de los procesos de promoción de la inversión privada, se dispone que el procedimiento previsto hasta ahora como simplificado, se aplique a la generalidad de los proyectos. Por ello, se modifica los incisos 43.1 y 43.2, y se incorpora el inciso 43.3 a fin de que el Reglamento del Decreto Legislativo No 1362 regule las condiciones, plazos y fases del procedimiento general.

- Incorporación del inciso 56.8 al Artículo 56:

  En las controversias internacionales, se dispone la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas en la etapa de trato directo como contraparte del inversionista, en lugar de la entidad pública titular del proyecto de Asociación Público-Privada, en el supuesto que el trato directo entre las partes no prospere.

- Incorporación de los incisos 58.3 y 58.4 al Artículo 58:

  Se implementan medidas para garantizar y privilegiar la continuidad del proyecto. Para ello, se prevé expresamente que el Reglamento regule un procedimiento para la contratación de terceros interventores, que garantice la continuidad del proyecto. Además, se dispone la posibilidad de acordar el carácter diferido de la liquidación a la culminación de la etapa o fase en que esta opere, sin requerir la celebración de una adenda contractual para ello.

- Incorporación de la DÉCIMO SÉTIMA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL:

  Se otorga a las entidades públicas titulares de proyectos la facultad para proceder a la celebración de convenios de colaboración con gobiernos regionales y locales para el financiamiento, contratación o ejecución de proyectos complementarios que viabilicen los proyectos de Asociación Público Privadas y en Activos

II. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

La presente iniciativa no irrogaría gastos al Estado, dado que las modificaciones normativas tendrían que verificarse a través de un procedimiento legislativo usual en el interior del Congreso de la República, sin implicar el uso se recursos de las arcas del Estado. Por el contrario, la modificatoria del Decreto Legislativo No 1362 irrogará enormes beneficios al Estado y a la Sociedad por contraposición a las pérdidas económicas proyectadas por la considerable cantidad de proyectos paralizados y la ineficiencia del sistema de asociaciones público-privadas en nuestro país.

Entre los beneficios que representará la presente ley será la creación de oportunidades para la inversión privada, los mecanismos de colaboración público privados y la continuidad de los proyectos de infraestructura y de servicios públicos en el territorio nacional. De hecho, el Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025[30], elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aprobado en sesión de Consejo de Ministros el 25 de agosto de 2021, que contiene las proyecciones macroeconómicas multianuales oficiales para la elaboración de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022; establece que en el periodo 2023-2025, la actividad económica alcanzaría un crecimiento promedio de 4,1% debido a un crecimiento sostenido de la demanda interna, principalmente por mayores inversiones. De esa manera, se precisa que, en el contexto de dar mayor impulso al Plan Nacional de Infraestructura, la inversión privada estará sostenida por el dinamismo de la inversión no minera, el cual servirá de vehículo para acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura y obras priorizadas bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (en adelante, "APPs").

Al respecto, debemos señalar que, la ejecución de proyectos de infraestructura y obras priorizadas bajo el esquema de APPs, no solo tiene injerencia en un crecimiento económico, sino también, permite reducir la brecha de infraestructura y mejorar la provisión de servicios públicos con la finalidad de establecer mejores condiciones para la vida de los ciudadanos. Es en ese marco, que se hace necesario realizar un diagnóstico de los proyectos de APPs. Al respecto, EY Perú señala que "*un incremento del 10% en inversión en infraestructura generaría una subida de 1,3% del PBI, ya que por cada US$1.000 millones, se crean 35.000 empleos directos y 5.000 indirectos*"[31].

---

[30] El Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025, se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2022_2025.pdf.

[31] Cuadro, Fernando (2022). Perú tiene US$ 19.600 millones en su cartera de proyectos. En La República. Consultado el 19 de enero del 2023. Link: https://larepublica.pe/economia/2022/10/20/inversion-peru-tiene-us196-millones-en-su-cartera-de-proyectos-plan-nacional-de-infraestructura-mef-kurt-burneo-g2g

Cuadro 23

Cuadro de Beneficiarios y Efectos de la Modificatoria del Decreto Legislativo N.º 1362 en el Sistema de Asociaciones Público-Privadas (APP)

Beneficiarios	Efectos Directos	Efectos Indirectos
Estado	Reactivación de proyectos de infraestructura paralizados.	Incremento en la recaudación tributaria por mayor actividad económica. Fortalecimiento institucional en la gestión de proyectos público-privados.
Ciudadanos	Mejora en la eficiencia del sistema de APPs Reducción de la brecha de infraestructura a nivel nacional	Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Generación de empleo directo e indirecto.
Economía	Aceleración del crecimiento económico (proyección de crecimiento promedio de 4,1% para el período 2023-2025)	Contribución al cumplimiento de metas del Plan Nacional de Infraestructura.

Fuente: Propia

III. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA

La entrada en vigor de la presente Ley generará efectos inmediatos, vinculados a la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos, en tanto que modifica sustancialmente el Decreto Legislativo N° 1362, optimizando los procedimientos, clarificando competencias, y estableciendo mecanismos expeditivos que fortalecerán el dinamismo de la inversión pública y privada en infraestructura estratégica para el país. Su aplicación permitirá superar las barreras normativas y procedimentales que históricamente han ralentizado los proyectos, propiciando un entorno de mayor eficiencia, predictibilidad y seguridad jurídica para los agentes económicos y las entidades del Estado involucradas.

La modificación de los artículos del Decreto Legislativo N° 1362, consolida el marco normativo vigente y robustece la coherencia interna del sistema de promoción de la inversión privada. La incorporación de disposiciones fortalece la capacidad de las entidades públicas titulares de proyectos para actuar con mayor autonomía técnica y operativa, otorgándoles facultades expresas para la determinación directa del valor de tasación de los inmuebles requeridos, la ejecución directa o financiada de actividades para la liberación de interferencias, así como para la compatibilización de las afectaciones que obstaculicen la viabilidad de los proyectos. Esta redistribución de competencias asegura la

celeridad de los procesos y disminuye la dependencia de múltiples instancias, lo cual ha sido identificado como una de las principales causas de demora en los proyectos de infraestructura a nivel nacional.

Desde una perspectiva operativa y administrativa, la norma promueve la simplificación de procedimientos, incorporando medidas como la aprobación automática de la Certificación de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y la Licencia Municipal de Funcionamiento para los proyectos bajo el ámbito de aplicación de la ley. Esta simplificación administrativa no solo reducirá significativamente los tiempos de tramitación, sino que también minimizará la discrecionalidad indebida de las autoridades competentes, garantizando que los procedimientos se resuelvan dentro de plazos predecibles y razonables, fortaleciendo así la transparencia y la eficiencia en la gestión pública. Además, se establece la incorporación de mecanismos de reporte periódico por parte de las entidades públicas titulares de proyectos, asegurando un seguimiento adecuado del avance de las inversiones, y contribuyendo al principio de rendición de cuentas.

En cuanto al impacto institucional, la entrada en vigor de la ley conlleva el fortalecimiento del rol de PROINVERSIÓN como ente rector del proceso de APP, devolviéndole competencias estratégicas para la conducción de los proyectos desde su estructuración hasta la adjudicación. De este modo, se subsana la dispersión normativa que limitaba su capacidad operativa y se fortalece la centralización de capacidades técnicas especializadas en una única entidad, lo que optimizará la eficiencia del proceso. Paralelamente, se reconoce expresamente la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos que incurran en omisiones o demoras en la tramitación de permisos, autorizaciones y procedimientos administrativos vinculados a la ejecución de estos proyectos, lo que contribuirá a una mayor diligencia por parte de los operadores del sistema administrativo.

Presupuestalmente, la norma impactará positivamente al establecer reglas claras sobre la responsabilidad financiera del Estado en la ejecución de los contratos, así como en la aplicación de garantías y compromisos firmes y contingentes. La intervención temprana del Ministerio de Economía y Finanzas en la evaluación de los proyectos garantiza la sostenibilidad fiscal y la coherencia con las reglas macroeconómicas vigentes. Asimismo, al facilitar la contratación directa de obras y servicios vinculados a la adquisición de áreas y la liberación de interferencias, se evitarán costos adicionales derivados de procesos largos y engorrosos, lo que permitirá un uso más eficiente de los recursos públicos y una ejecución presupuestal más oportuna.

Desde la dimensión social y económica, la implementación de la norma contribuirá de manera sustancial a la reactivación económica, dinamizando la inversión privada y pública en sectores estratégicos y generando efectos multiplicadores en la economía nacional. La ejecución oportuna de proyectos de infraestructura repercutirá positivamente en la generación de empleo directo e indirecto, en la dinamización de las economías locales y regionales, así como en la mejora de la calidad de vida de la población, al cerrar brechas de acceso a

servicios básicos y promover una mayor integración territorial. La Ley se convierte así en un instrumento clave para materializar los objetivos trazados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025, así como para el cumplimiento de los compromisos internacionales del país en materia de desarrollo sostenible.

Finalmente, cabe destacar que la norma se aplicará de manera inmediata a todos los procedimientos en curso y a aquellos que se inicien tras su publicación, asegurando la continuidad de los procesos existentes y otorgando un marco de certeza jurídica para las inversiones en trámite. El Poder Ejecutivo, en cumplimiento de las disposiciones complementarias y transitorias establecidas, tendrá un plazo perentorio para adecuar la normativa reglamentaria vigente, garantizando una transición ordenada hacia el nuevo régimen jurídico. Con ello, se asegura que la vigencia de la presente ley no solo sea efectiva desde el punto de vista formal, sino que también tenga impactos tangibles y verificables en la mejora del clima de inversión y en el desarrollo económico y social del país

IV. RELACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL

La presente propuesta se vincula con las políticas de Competitividad del País que comprende las políticas de (17) afirmación de la economía social de mercado, (18) Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica, (19) Desarrollo sostenible y gestión ambiental,(20) Desarrollo de la ciencia y la tecnología, (21) Desarrollo en infraestructura y vivienda, (22) Política de comercio exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad (23) Política de desarrollo agrario y rural, y (22) Política de comercio exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad del Acuerdo Nacional (AN).